

GACETA OFICIAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AÑO CLI - MES V

Caracas, jueves 22 de febrero de 2024

Número 42.824

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Franklin Mauricio Zeltzer Malpica, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la Santa Sede, Estado de la Ciudad del Vaticano; y se Encarga como Responsable de los fondos de anticipo y avance que le sean girados a la Unidad Administradora Desconcentrada, para el Ejercicio Económico Financiero 2024.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Consejo Nacional de Universidades
Oficina de Planificación del Sector Universitario
Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones, de carácter permanente, de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, adscrita a este Ministerio; la cual estará integrada por las ciudadanas y el ciudadano que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE INAC

Providencia mediante la cual se renueva el Certificado de Funcionamiento del Centro de Entrenamiento Aeronáutico Multiservicios Aéreos Vikingo, C.A., de acuerdo con las condiciones, estipulaciones y términos que en ella se indican.

Providencia mediante la cual se designa como Centro Médico Aeronáutico Examinador (CMAE) a la sociedad mercantil Flight Center Intl Aviation Group, C.A., con base a las condiciones, estipulaciones y términos que en ella se especifican.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Sala Plena

Acta de la sesión ordinaria de la Sala Plena del 21 de febrero de 2024, relativa a la conformación de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia.

Sala Constitucional

“Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que, con carácter vinculante, establece la competencia de la jurisdicción especial en materia de género para el juzgamiento de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuando la comisión de los mismos sea contra niñas y adolescentes indígenas, o en las causas donde concurren niños o adolescentes indígenas víctimas de ambos sexos, los cuales además deben ser juzgados de conformidad con lo determinado por la Ley Orgánica para Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, desaplicando para el juzgamiento de esos delitos la jurisdicción indígena”.

MINISTERIO PÚBLICO

Acuerdo mediante el cual se impone la condecoración de la “Orden al Mérito General en Jefe Jacinto Pérez Arcay”, en su Única Clase, al ciudadano Abogado Mainel Alejandro Ocando Rojas, Fiscal Provisorio en la Fiscalía 34 Nacional Plena.

Acuerdo mediante el cual se impone la Medalla de la “Orden al Mérito Félix Mercádez Vargas”, en su Única Clase, a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

Acuerdo mediante el cual se otorga la “Orden al Mérito Dr. Boris Bossio Barceló”, en su Única Clase, a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se indican.

Acuerdo mediante el cual se impone la Condecoración de la “Orden al Mérito del Ministerio Público”, en su Primera Clase, Segunda Clase y Tercera Clase, a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se especifican.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jorge Luis Villegas Fernández, como Director, en calidad de Encargado, de la Dirección de Determinación de Responsabilidades, adscrita a la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Máximo Órgano de Control Fiscal.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES EXTERIORES
DESPACHO DEL MINISTRO

DM Nº 052

Caracas, 20 FEB 2024

213°, 165° y 25°

RESOLUCIÓN

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, **YVÁN EDUARDO GIL PINTO**, designado mediante Decreto Nº 4.763 de fecha 05 de enero de 2023, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 42.542 de la misma fecha, en cumplimiento del Punto de Cuenta Nº 038-2023 de fecha 29 de diciembre de 2023, del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, y previamente autorizado por la Asamblea Nacional en Sesión Ordinaria de fecha 15 de febrero de 2024, publicada en Gaceta Oficial Nº 42.819 de fecha 15 de febrero de 2024, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto Nº 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014 y de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.217 de fecha 30 de julio de 2013, así como en su Disposición Derogatoria Primera, según la cual quedan vigentes todos los artículos referidos a las competencias, funciones, jerarquía, ingreso, permanencia, capacitación, evaluación y régimen sancionatorio de los funcionarios y funcionarias del servicio exterior, establecidos en la Ley de Servicio Exterior, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.241 de fecha 02 de agosto de 2005.

RESUELVE

Artículo 1. Designar al ciudadano **FRANKLIN MAURICIO ZELTZER MALPICA**, titular de la cédula de identidad N° **V-5.114.069**, como **Embajador Extraordinario y Plenipotenciario** de la República Bolivariana de Venezuela ante la **Santa Sede, Estado de la Ciudad del Vaticano**.

Artículo 2. Encargar al ciudadano **FRANKLIN MAURICIO ZELTZER MALPICA**, titular de la cédula de identidad N° **V-5.114.069**, como **Responsable de los fondos en anticipo y en avance** que le sean girados a la **Unidad Administradora Desconcentrada N°42123**, para el **Ejercicio Económico Financiero 2024**.

Artículo 3. El ciudadano mencionado deberá realizar la **Declaración Jurada de Patrimonio** y presentar ante la **Oficina de Gestión Humana** la copia fotostática del comprobante emitido por la **Contraloría General de la República**, de conformidad con el artículo 24 de la **Ley Contra la Corrupción**.

Artículo 4. Se instruye a la **Oficina de Gestión Humana** para que notifique a la parte interesada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la **Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos**, publicada en la **Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinario** de fecha 01 de julio de 1981.

Comuníquese y publíquese,



EDUARDO GIL PINTO
Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores
Decreto N° 4.763 de fecha 05 de enero de 2023
Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.542 de la misma fecha

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
DESPACHO DE LA MINISTRA
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO

CARACAS, 14 FEB 2024
213°, 164° y 24°

PROVIDENCIA N° 007

En ejercicio de lo establecido en el artículo 22 de la **Ley de Universidades**, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del **Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas** y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 del **Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública**;

DECIDE

Artículo 1. Se constituye la **Comisión de Contrataciones de carácter permanente de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria**, la cual tendrá como funciones, ejecutar los procedimientos regulados en la **Ley de Contrataciones Públicas**, para la adquisición de bienes, la contratación de servicios y la ejecución de obras.

Artículo 2. La **Comisión de Contrataciones** estará integrada por tres (3) miembros principales y sus respectivos suplentes, en la cual estarán representadas, las áreas: jurídica; económico-financiera y técnica, conforme se especifica a continuación:

	MIEMBRO PRINCIPAL	MIEMBRO SUPLENTE
ÁREA ECONÓMICA Y FINANCIERA	BEATRIZ AVENDAÑO C.I. NRO. V- 6.877.128	ISBELIA LUCIA MALPICA C.I. NRO. V- 14.062.067
ÁREA TÉCNICA	ANA MARÍA VERDE C.I. NRO. V-12.174.099	ZOREMIL CHIRINO C.I. NRO. V- V-12.180.519
ÁREA JURÍDICA	CAROLIN MOYA C.I. NRO. V- 11.513.488	RAFAEL DE SOUSA VISCONTI C.I. NRO. V- 17.641.911

Los prenombrados funcionarios ejercerán las atribuciones establecidas en el artículo 15 de la **Ley de Contrataciones Públicas**, y velarán por el cumplimiento del ordenamiento legal vigente.

Artículo 3. Se designa como **Secretaria Principal** de la **Comisión de Contrataciones** a la ciudadana **OLGA BRICEÑO**, titular de la cédula de identidad Nro. **V-11.900.842**, y como **Secretaria Suplente** a la ciudadana **YURIANGEL NAIRIAM FREITES**, titular de la cédula de identidad Nro. **V- 27.693.463**

Artículo 4. La **Contraloría General de la República** y la **Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria**, podrán designar **observadores u observadoras**, en los procedimientos de selección de contratistas que se desarrollen, los cuales tendrán derecho a voz, pero no a voto.

Artículo 5. Los miembros de la **Comisión de Contrataciones** y el **Secretario(a)**, antes de asumir sus funciones, deberán prestar juramento de cumplir con la **Constitución de la República Bolivariana de Venezuela**, **Leyes de la República**, los deberes inherentes a sus funciones y rendir cuenta de sus actuaciones, en los términos y condiciones que determine la **Ley**.

Artículo 6. La presente **Providencia** entrará en vigencia a partir del 18 de enero de 2024.

Comuníquese y Publíquese,



SANDRA OBLITAS RUZA
MINISTRA DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Decreto N° 4.804 de fecha 17 de abril de 2023
G.O.R.B.V. N° 42.610 de fecha 17 de abril de 2023
DIRECTORA DE LA OFICINA
DE PLANIFICACION Y
SECTOR UNIVESTITARIO (OPSU)
Decreto N° 4.814 de fecha 20 de junio de 2023
G.O.R.B.V. N° 42.654 de fecha 20 de junio de 2023

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-GDA-061-24
CARACAS, 29 DE ENERO DE 2024

213°, 164° y 24°

CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO AERONÁUTICO

El **Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil**, designado según **Decreto Nro. 4.851**, publicado en **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.701**, ambos de fecha 28 de agosto de 2023, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 4, numeral 1 de la **Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil**, publicada en **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.333**, de fecha 12 de diciembre de 2005, en concordancia con el numeral 11 del artículo 7 y los numerales 1, 3 y 15 literal c del artículo 13 *ejusdem*, actuando en este acto en su condición de **Autoridad Aeronáutica de la República**, conforme con lo dispuesto en el artículo 9 de la **Ley de Aeronáutica Civil**, publicada en la **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.140**, de fecha 17 de marzo de 2009, y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 89 *ejusdem* y los requerimientos exigidos según lo previsto en la **Regulación Aeronáutica Venezolana 142 (RAV 142)**, denominada: **"Certificación de Centros de Entrenamiento Aeronáutico (CEA)"**, publicada en **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.753 Extraordinario**, de fecha 28 de julio de 2023.

POR CUANTO

En comunicación de fecha 03 de julio de 2023, el ciudadano **Alexie Calderón Blanco**, en su condición de **Director** de la sociedad mercantil **MULTISERVICIOS AEREOS VIKINGO, C.A.**, protocolizada ante el **Registro Mercantil Primero del distrito Capital**, en fecha 13 de julio de 2015, bajo el N° 58, Tomo 113-A, e inscrita en el **Registro Aeronáutico Nacional** en fecha 19 de febrero de 2018, bajo el N° 04, Tomo II, 1er. Trimestre del 2018 del **Libro de Actas Constitutivas, Estatutos Sociales, Modificaciones Estatutarias, Mandatos, Poderes o Autorizaciones de Empresas Relacionadas con la Actividad Aeronáutica**, cuya última modificación estatutaria fue protocolizada ante el **Registro Mercantil Primero del Distrito Capital**, en fecha 11 de agosto de 2022, bajo el N° 4 Tomo 406-A, e inscrita ante el **Registro Aeronáutico Nacional** en fecha 06 de septiembre de 2022, bajo el N° 35, Tomo II, 3er Trimestre de 2022 del **Libro de Actas Constitutivas, Estatutos Sociales, Modificaciones Estatutarias, Mandatos, Poderes o Autorizaciones de Empresas**

Relacionadas con la Actividad Aeronáutica; solicitó formalmente la renovación del Certificado de Funcionamiento del Centro de Entrenamiento Aeronáutico (CEA), autorizado para dictar curso de Instructor de Vuelo Instrumental Simulado y Habilitación especial de vuelo por instrumentos, de conformidad con lo previsto en la RAV 142.

POR CUANTO

La Gerencia General de Seguridad Aeronáutica, mediante comunicación N° GGSA/GCO/009/2024, de fecha 03 de enero de 2024, remitió a la Consultoría Jurídica de este Instituto, el expediente administrativo del Centro de Entrenamiento Aeronáutico **MULTISERVICIOS AÉREOS VIKINGO, C.A.**, que contiene las documentales que avalan suficientemente la emisión del Certificado de Funcionamiento, del que se desprende, que mantienen la capacidad legal, técnica y económica, para el desarrollo seguro, ordenado y eficiente de la actividad que desarrollará como CEA, según las especificaciones de entrenamiento asociadas al Certificado de Funcionamiento.

POR CUANTO

Esta Autoridad Aeronáutica de la República, verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa técnica para la tramitación de la emisión del Certificado de Funcionamiento a que se contrae este Acto Administrativo, en atención a lo cual se considera procedente la renovación de la Certificación de Centro de Entrenamiento de Aeronáutico Civil para la formación del personal aeronáutico indicado en la especificaciones de instrucción, según lo previsto en artículo 9 y 89 de la Ley de Aeronáutica Civil y la Regulación Aeronáutica Venezolana 142 (RAV 142), en ejercicio de las atribuciones legalmente conferidas;

DECIDE

Artículo 1. Renovar el Certificado de Funcionamiento del Centro de Entrenamiento Aeronáutico **MULTISERVICIOS AEREO VIKINGO, C.A.**, de acuerdo con las condiciones, estipulaciones y términos que a continuación se establecen:

- 1. Tipo de Permiso:** Certificado de Funcionamiento N° **CCEA-61**, autorizado para dictar cursos de:
 1. Habilitación Especial Vuelo por Instrumento
 2. Instructor de Vuelo Instrumental Simulado
- 2. Validez:** Valido por un (01) año a partir de la fecha de emisión, sujeto al resultado satisfactorio de la auditoría de la validez continua del Certificado de Funcionamiento, que realizará la Autoridad Aeronáutica, de acuerdo a los establecido por el programa de vigilancia de seguridad operacional.
- 3. Base de Operaciones e Instalaciones de Funcionamiento:** Av. Francisco de Miranda, Torre Bazar Bolívar, Piso 5, Ofic. 501, municipio Sucre, California Norte, estado Bolivariano de Miranda.

Artículo 2. El CEA **MULTISERVICIOS AEREO VIKINGO, C.A.**, está obligado a cumplir las normas previstas en la Ley de Aeronáutica Civil, las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas aplicables al tipo de operación que realiza y demás disposiciones emanadas de la Autoridad Aeronáutica de la República.

Artículo 3. En lo que respecta a la constitución, propiedad sustancial y control efectivo, la mencionada sociedad mercantil, deberá cumplir con las siguientes disposiciones:

1. Solicitar por escrito ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), autorización para realizar cualquier modificación en cuanto a la composición accionaria de la empresa; tales como, venta de acciones, aumento de capital, o cambio de propiedad de la empresa, toda vez que el otorgado para la prestación del servicio de instrucción, es de carácter intransferible.
2. Notificar de inmediato y por escrito al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) el cambio de razón social, domicilio o representante de la sociedad mercantil.
3. El control efectivo y la dirección de la sociedad mercantil en su mayoría deberán estar a cargo de personas de nacionalidad venezolana.
4. El patrimonio estará constituido, según lo descrito en el acta constitutiva de la empresa a que se contrae este acto administrativo.
5. Comunicar de inmediato y por escrito a la Autoridad Aeronáutica cualquier modificación o alteración de carácter legal, económico, financiero, administrativo, técnico u operacional, que lleve a cabo la empresa.

6. Inscribir ante el Registro Aeronáutico Nacional, copia certificada de las Actas de Asambleas, de Accionistas, ordinarias y extraordinarias celebradas anualmente por la nombrada sociedad mercantil.
7. Presentar a la Gerencia General de Transporte Aéreo adscrita al INAC, el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, ajustados por inflación según el método DPC-10, acompañado por un dictamen de auditoría visado por un Contador Público en ejercicio independiente de su profesión, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos correspondiente.

Artículo 4. Este Certificado de Funcionamiento podrá ser revocado o suspendido por evidenciarse el incumplimiento de la normativa técnica legal aplicable, previo cumplimiento del procedimiento administrativo establecido en la Ley de Aeronáutica Civil.

Artículo 5. Esta Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese,

 PRESIDENCIA DEL INAC
LEONARDO ALEJANDRO BRICEÑO DUDAMEL
 Presidente (E) del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC)
 Decreto N° 4.851 de fecha 28/08/2023
 Publicado en Gaceta Oficial N° 42.701 del 28/08/2023

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-GDA-065-24
 CARACAS, 31 DE ENERO DE 2024

213°, 164° y 24°

CERTIFICACIÓN DE CENTRO MÉDICO AERONÁUTICO EXAMINADOR (CMAE)

El Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, designado según Decreto Nro. 4.851, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.701, ambos de fecha 28 de agosto de 2023, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 1 y 3 del artículo 13 de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005, actuando en este acto en su condición de Autoridad Aeronáutica de la República, conforme con lo dispuesto en el artículo 9 y 40 de la Ley de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.140, de fecha 17 de marzo de 2009, cumplido los requisitos que exige lo dispuesto en la Regulación Aeronáutica Venezolana 67 (RAV 67) "Normas para el Otorgamiento del Certificado Médico Aeronáutico", publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.753 Extraordinario, de fecha 28 de julio de 2023.

POR CUANTO

En fecha 27 de diciembre de 2023, la ciudadana Laura González De Silva, en su condición de Directora de la sociedad mercantil **FLIGHT CENTER INTL AVIATION GROUP, C.A.**, inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto del Distrito Capital, en fecha 19 de agosto de 2021, anotada bajo el N° 2, Tomo -1-A, y ante el Registro Aeronáutico Nacional bajo el N° 16, Tomo II, en fecha 01 de septiembre de 2021, cuya última modificación estatutaria fue realizada mediante Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, protocolizada ante el Registro Mercantil Cuarto del Distrito Capital, en fecha 06 de noviembre de 2023, bajo el N° 17, Tomo 882-A., e inscrita ante el Registro Aeronáutico Nacional en fecha 18 de diciembre de 2023, bajo el N° 30, Tomo III, 4to. Trimestre de 2023 del Libro de Actas Constitutivas, Estatutos Sociales, Modificaciones Estatutarias, Mandatos, Poderes o Autorizaciones de Empresas Relacionadas con la Actividad Aeronáutica; solicitó formalmente iniciar el Proceso de Renovación del Certificado como Centro Médico Aeronáutico Examinador (CMAE), de conformidad con lo establecido en la Regulación Aeronáutica Venezolana 67 (RAV 67).

POR CUANTO

La Gerencia General de Seguridad Aeronáutica, mediante comunicación N° GGSA/GCO/047-2023, de fecha 15 de julio de 2023, remitió el expediente administrativo correspondiente a la sociedad mercantil **FLIGHT CENTER INTL AVIATION GROUP, C.A.**, que contiene las documentales que avalan la certificación, como Centro Médico Aeronáutico Examinador, habilitado para realizar los exámenes médicos autorizados por especialidad para la emisión inicial y renovación de certificados médicos conforme a la Regulación Aeronáutica Venezolana 67 (RAV 67).

POR CUANTO

La sociedad mercantil **FLIGHT CENTER INTL AVIATION GROUP C.A.**, ha cumplido con los requisitos conforme a los parámetros establecidos en la Regulación Aeronáutica Venezolana 67 (RAV 67), lo que constituye un aval suficiente para la emisión de la presente Certificación como Centro Médico Aeronáutico Examinador (CMAE).

DECIDE:

Artículo 1. Se designa como Centro Médico Aeronáutico Examinador (CMAE) a la sociedad mercantil **FLIGHT CENTER INTL AVIATION GROUP, C.A.**, con base a las condiciones, limitaciones y en los términos que a continuación se indican:

- **Tipo de Permiso:** Certificado de Centro Médico Aeronáutico Examinador (CMAE).
- **Duración del Permiso:** Veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de emisión del Certificado de Centro Médico Aeronáutico Examinador (CMAE) N° 008.
- **Dirección:** Av. Francisco de Miranda, Edificio Mene Grande, Piso 7, Oficina 03, Urb. Los Palos Grandes, Caracas, Dto Capital.
- **Especialidades habilitadas:** Medicina General, Medicina Aeronáutica, Gastroenterólogo, Cardiología, Odontología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Psicología, Psiquiatría y Neurología.

Artículo 2. La sociedad mercantil **FLIGHT CENTER INTL AVIATION GROUP C.A.**, se sujeta al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Aeronáutica Civil, las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas y demás normativas emanadas de la Autoridad Aeronáutica de la República.

Artículo 3. En lo que respecta a la constitución, propiedad sustancial y control efectivo de la sociedad mercantil **FLIGHT CENTER INTL AVIATION GROUP, C.A.**, la empresa estará sujeta a cumplir con las siguientes disposiciones:

1. Notificar de inmediato y por escrito al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) el cambio de razón social, composición accionaria, domicilio o representante de la misma, toda vez que la Certificación como Centro Médico Aeronáutico Examinador, tiene carácter intransferible, a menos que para el traspaso o cesión de los mismos, previamente se obtenga la autorización del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.
2. El control y la dirección de la empresa en su mayoría deberán estar a cargo de personas de nacionalidad venezolana.
3. El patrimonio accionario debe ser nominativo y en su mayoría pertenecer a personas de nacionalidad venezolana.
4. Comunicar de inmediato y por escrito a la Autoridad Aeronáutica cualquier modificación o alteración de carácter legal, económico, financiero o administrativo, que lleve a cabo la sociedad mercantil.
5. Inscribir ante el Registro Aeronáutico Nacional, copia certificada de las Actas de Asambleas, de Accionistas, ordinarias y extraordinarias celebradas por la nombrada Sociedad Mercantil.
6. Presentar ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, ajustados por inflación según el método DPC-10, acompañado por un dictamen de auditoría visado por un Contador Público en ejercicio independiente de su profesión, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos correspondiente.
7. Presentar ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) previo al cumplimiento de los veinticuatro meses (24), correspondiente al programa de vigilancia periódica, regulares y aleatorias, todos los requisitos exigidos por la normativa técnica aplicable.

Artículo 4. El Certificado como Centro Médico Aeronáutico Examinador, podrá ser revocado o suspendido por evidenciarse el incumplimiento de la normativa técnica y legal aplicable.

Artículo 5. Este Acto Administrativo entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese.

LEONARDO ALBERTO BRICEÑO DUDAMEL
Presidente (E) del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC)

Decreto N° 4.851 de fecha 28/08/2023
Publicado en Gaceta Oficial N° 42.701 del 28/08/2023

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

JOHN ENRIQUE PARODY GALLARDO, Secretario del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, titular de la cédula de identidad N° 15.030.678, quien suscribe, CERTIFICA: que el extracto que a continuación se transcribe es traslado fiel y exacto del original del Acta de sesión ordinaria de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del 21 de febrero de 2024, la cual es del tenor siguiente: "Se dio inicio a la sesión de hoy, 21 de febrero de 2024, presidida por la Magistrada Presidenta, doctora Caryslla Beatriz Rodríguez Rodríguez, con la asistencia de las Magistradas y los Magistrados Edgar Gavidia Rodríguez, Tania D'Amelio Cardiet, Henry José Timare Tapia, Malaquías Gil Rodríguez, Elsa Janeth Gómez Moreno, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Fanny Márquez Cordero, Carmen Marisela Castro Gilly, José Luis Gutiérrez Pama, Carlos Alexis Castillo Ascario, Gladys María Gutiérrez Alvarado, Luis Fernando Damiani Bustillos, Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, Carmen Eneida Alves Navas, Juan Carlos Hidalgo Pandares, Elías Rubén Bitter Escalona, Michel Adriana Velásquez Grillet y Emilio Antonio Ramos González. Se deja constancia de la ausencia justificada del Magistrado doctor Maikel José Moreno Pérez. De inmediato y verificado como fue el quórum, procedió la Sala a considerar los puntos del orden del día de la siguiente manera:

(...Omissis...)

Parte I: Administrativa:

Designación de los miembros de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia para el período 2024-2026, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, 75 y 76 del Reglamento Interno de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, en acatamiento de la normativa mencionada se procedió a someter a votación los cargos para la conformación de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, cuya votación para las designaciones fueron de forma separada, leyéndose previamente el nombre de la Magistrada o Magistrado para someter a consideración y luego la respectiva votación. Siendo aprobada por unanimidad. Así, cumplidas todas las formalidades de Ley, se deja expresa constancia de la conformación de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia:

Comisión Judicial:


Presidenta: Caryslla Beatriz Rodríguez Rodríguez
Primer Vicepresidente: Edgar Gavidia Rodríguez
Segunda Vicepresidente: Tania D'Amelio Cardiet
Miembro principal: Malaquías Gil Rodríguez
Miembro principal: Elsa Janeth Gómez Moreno

(...Omissis...)

Se declaró concluida la sesión.

La Magistrada Presidenta (Fdo.) CARYSLLA BEATRIZ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, El Secretario (Fdo.) JOHN ENRIQUE PARODY GALLARDO". (Sello húmedo del Tribunal Supremo de Justicia en el que se lee: "República Bolivariana de Venezuela - Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena")

En la ciudad de Caracas, a los veintidós (22) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024).


DR. JOHN ENRIQUE PARODY GALLARDO
Secretario del Tribunal Supremo de Justicia

1790

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
EN SALA CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE 17-1100

MAGISTRADA PONENTE: MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET

El 25 de octubre de 2017, se recibió en la Secretaría de esta Sala un escrito contentivo de una solicitud que denominaron "Regulación de Competencia", presentada por un grupo de ciudadanos que se identifican como el Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad "Huottöja Ahuiyáru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" "Itasode Jueipocattö Tüborö Roechuome Ahuiyáru Tuhuo'cho Reje", en el cual plantearon su jurisdicción para juzgar al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N.º V-13.058.323, obrero, de cuarenta y tres años de edad, indígena y miembro de la comunidad "Las Pavas", ubicada en el Municipio Atures del Estado Amazonas, rechazando el proceso que se le sigue al referido ciudadano ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, identificada la causa penal con el alfanumérico XP01-P-2017-000273, por la presunta comisión del delito de abuso sexual con penetración a niña, previsto y sancionado en el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, efectuado en contra de una niña indígena, cuya identidad es omitida, de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

El 25 de octubre de 2017 se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado Dr. CALIXTO ANTONIO ORTEGA RIOS.

El 27 de octubre de 2017, se recibió el Oficio N.º 1516-2017, del 20 de septiembre de 2017, emanado del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, suscrito por la Jueza Yommar Dailyn Rosales Requena, mediante el cual remitió el "Cuaderno de Conflicto de Competencia", contenido de 165 folios útiles, anexo un CD y copias certificadas de la causa penal identificada con el alfanumérico XP01-P-2017-000273, seguida al ciudadano **HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO**, ya identificado, en el cual está incluida la decisión de dicha instancia sobre el conflicto de competencia planteado.

El 8 de marzo de 2018, los ciudadanos José Ochoa, José Muñoz y Antonio Palacio, actuando con el carácter acreditado en autos, formularon alegatos y efectuaron pedimentos, específicamente solicitaron la revisión o revocación de la medida privativa judicial preventiva de libertad, dictada en la persona de **HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO**.

El 28 de junio de 2018, la Sala dictó la sentencia N.º 437, mediante la cual, entre otras disposiciones, realizó una reconducción de la calificación jurídica de la demanda incoada a una **ACCIÓN INNOMINADA DE NATURALEZA CONSTITUCIONAL**, toda vez que los derechos fundamentales cuya protección se pretende, no poseen ninguna legislación regulatoria al respecto, por encontrarse desprovisto de un procedimiento judicial que permita su efectiva tutela. Y asimismo esta Sala declaró que:

"(...) PRIMERO: Es COMPETENTE para conocer de la acción incoada de naturaleza constitucional incoada por el grupo de ciudadanos que se denominan Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad Huottöja Ahuyäru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jueipocattö Täbotö Roechuome Ahuyäru Tuhuo'cho Reje, en el cual plantean su jurisdicción para juzgar al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO.

SEGUNDO: Se ADMITE la acción incoada de naturaleza constitucional interpuesta por el grupo de ciudadanos que se denominan Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad Huottöja Ahuyäru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jueipocattö Täbotö Roechuome Ahuyäru Tuhuo'cho Reje, en el cual plantean su jurisdicción para juzgar al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO.

TERCERO: Se ORDENA notificar a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General de la República y al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

CUARTO: Se ORDENA a la Coordinación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, remita la actualización de la información que solicitó al Consejo de Protección de dicho municipio, en el caso de marvas, dentro del lapso de cinco (5) días, contados desde el momento de su notificación, más un término de la distancia de seis (6) días.

QUINTO: Se IMPONE a la Coordinación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, el deber de solicitar mensualmente al Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del Municipio Atures del Estado Amazonas, un informe en el que se revele la situación social, el estado de salud y la ubicación de la niña, el cual deberá, una vez recibido, remitir de forma inmediata a esta Sala Constitucional(...)"

El 24 de septiembre de 2018 Consta en los autos del presente expediente la práctica de la notificación, de los órganos mencionados en la sentencia N.º 0437.

El 24 de septiembre de 2018, la Presidencia de la Sala emite el Oficio N.º 18-0615, remitiendo copia certificada de la sentencia N.º 437, dictada por esta Sala 28 de junio de 2018, al ciudadano Tarek Williams Saab, en su carácter de Fiscal General de la República.

El 24 de septiembre de 2018, la Presidencia de la Sala emite el Oficio N.º 18-0616, remitiendo copia certificada de la sentencia N.º 437, dictada por esta Sala 28 de junio de 2018, al ciudadano Alfredo Ruiz Angulo, en su carácter de Defensor del Pueblo.

El 24 de septiembre de 2018, la Presidencia de la Sala emite el Oficio N.º 18-0617, remitiendo copia certificada de la sentencia N.º 437, dictada por esta Sala 28 de junio de 2018, a la ciudadana Aloha Joselyn Núñez Gutiérrez, en su carácter de Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

El 24 de septiembre de 2018, la Presidencia de la Sala emite el Oficio N.º 18-0618, remitiendo copia certificada de la sentencia N.º 437, dictada por esta Sala 28 de junio de 2018, al Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, con sede en Puerto Ayacucho.

El 2 de octubre de 2018, se recibió escrito en la Secretaría de la Sala, suscrito por el abogado Víctor Hugo Arias Revilla, actuando con el carácter de Fiscal Cuarto (E) del Ministerio Público con Competencia para actuar ante las Sala Plena, de Casación y Constitucional de este Máximo Tribunal, mediante el cual solicitó copias simples relacionados con el presente caso.

El 2 de octubre de 2018, consta diligencia presentada ante la Secretaría de la Sala, por el ciudadano Eduard Segundo Pérez Volcanes, actuando con el carácter de Alguacil de esta Sala, con la cual consignó resultados de la entrega del oficio N.º 18-0615, del 24 de septiembre de 2018, dirigido al ciudadano Tarek Williams Saab, Fiscal General de la República. Se acordó agregar la presente diligencia y anexó al expediente respectivo.

El 5 de octubre de 2018, consta diligencia presentada ante la Secretaría de la Sala, por el ciudadano Eduard Segundo Pérez Volcanes, actuando con el carácter de Alguacil de esta Sala, con la cual consignó resultados de la entrega del oficio N.º 18-0616, del 24 de septiembre de 2018, dirigido al ciudadano Alfredo Ruiz Angulo, Defensor del Pueblo. Se acordó agregar la presente diligencia y anexó al expediente respectivo.

El 8 de octubre de 2018, consta diligencia presentada ante la Secretaría de la Sala, por el ciudadano Eduard Segundo Pérez Volcanes, actuando con el carácter de Alguacil de esta Sala, con la cual consignó resultados de la entrega del oficio N.º 18-0618, dirigido al ciudadano Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, Puerto Ayacucho. Se acordó agregar la presente diligencia y anexó al expediente respectivo.

El 9 de octubre de 2018, consta diligencia presentada ante la Secretaría de la Sala, por el ciudadano Eduard Segundo Pérez Volcanes, actuando con el carácter de Alguacil de esta Sala, con la cual consignó resultados de la entrega del oficio N.º 18-0617, dirigido a la ciudadana Aloha Joselyn Núñez Gutiérrez, Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Se acordó agregar la presente diligencia y anexó al expediente respectivo.

El 22 de octubre de 2018, consta diligencia presentada ante la Secretaría de la Sala, mediante la cual el abogado Víctor Hugo Arias Revilla, actuando con el carácter de Fiscal Cuarto (E) del Ministerio Público para actuar en la Sala Plena, las Salas de Casación y Constitucional de este Máximo Tribunal, retiró las copias simples solicitadas.

El 31 de octubre de 2018, se recibió el oficio N.º FTSJ-4-0340-2018, del 29 de octubre de 2018, por el cual el abogado Víctor Hugo Arias Revilla, actuando con el carácter de Fiscal Cuarto (E) del Ministerio Público con Competencia para actuar ante las Sala Plena, de Casación y Constitucional de este Máximo Tribunal, informó que fue comisionado por el ciudadano Fiscal General de la República para actuar en el presente caso.

El 21 de noviembre de 2018, se recibió escrito en la Secretaría de la Sala, mediante el cual el ciudadano Antonio Rogelio Palacio, autoridad legítima del Tribunal de la Jurisdicción Especial de la Comunidad Huottöja Ahuyäru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas", Estado Amazonas, asistido por el abogado Guillermo Marciales, efectuó pedimento y consignó documentos.

El 22 de noviembre de 2018, se recibió escrito en la Secretaría de la Sala, mediante el cual el abogado Robaldo Cortéz, actuando con el carácter de Fiscal Nonagésimo Primero Nacional del Ministerio Público con Competencia en Materia Indígena, solicitó copias simples relacionadas con el presente caso.

El 6 de diciembre de 2018, se recibió diligencia en la Secretaría de la Sala, mediante la cual el abogado Robaldo Cortez, actuando con el carácter de Fiscal Nonagésimo Primero Nacional del Ministerio Público, con Competencia en Materia Indígena retiró copias simples relacionadas con el presente caso.

El 10 de diciembre de 2018, se recibió en la Secretaría de esta Sala el oficio N.º FTSJ-4-0377-2018, del 5 de diciembre de 2018, mediante el cual la abogada Rosa María Díaz Pérez, Fiscal Cuarta del Ministerio Público con Competencia para actuar ante la Sala Plena y las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, informó de su designación para ejercer la representación del Ministerio Público en esta acción incoada de naturaleza constitucional.

El 4 de febrero de 2019, se recibió el oficio N.º 017-2019, del 9 de enero de 2019, suscrito por la abogada Marilyn de Jesús Colmenares, en su carácter Presidenta del Circuito Judicial Penal Fronterizo del Estado Amazonas, remitiendo actuaciones complementarias.

constantes de 24 folios útiles, de la causa identificada con el alfanumérico XP01-P-2017-000273, de la nomenclatura del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la misma Circunscripción Judicial.

El 4 de febrero de 2019, se recibió el oficio N.º 02-19, del 7 de enero de 2019, suscrito por el abogado Mario Alberto Marcano Escobar, Juez Coordinador del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, con el cual suministró información que guarda relación con la situación actual, estado de salud y la ubicación física de la adolescente indígena, presuntamente víctima del delito, cuya identidad se omite, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

El 5 de febrero de 2019, se recibe diligencia en la Secretaría de la Sala, mediante la cual el abogado Víctor Hugo Arias Revilla, actuando con el carácter de Fiscal Cuarto (E) del Ministerio Público para actuar en las Salas Plena, de Casación y Constitucional de este Máximo Tribunal, solicitó copias simples.

El 5 de febrero de 2021, se reunieron en el Salón de Audiencias de esta Sala, los ciudadanos Magistrados Doctores Lourdes Benicia Suárez Anderson, Presidenta de la Sala, Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente, y los Magistrados Doctores Carmen Zuleta de Merchán, Juan José Mendoza Jover, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y René Alberto Degraives Almarza, a los fines de la instalación de la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada de la siguiente manera: Doctora Lourdes Benicia Suárez Anderson, Presidenta de la Sala, Doctor Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente, y los Magistrados Doctores Carmen Zuleta de Merchán, Juan José Mendoza Jover, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y René Alberto Degraives Almarza.

El 20 de abril de 2022, el abogado Carlos Alberto Guerrero Quintana, en su calidad de Defensor Público Provisorio Segundo, con competencia para actuar ante las Salas Plena, Constitucional, Casación Civil, Casación Social, Político Administrativa y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, actuando como defensor público del ciudadano **HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO**, ya identificado, presentó, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, escrito con el cual manifestó el interés procesal en el presente caso y solicitó pronunciamiento en la acción inominada constitucional, en la cual es parte su defendido. Se acordó agregar los referidos escritos al expediente respectivo.

El 27 de abril de 2022, se reunieron en el Salón de Audiencias de esta Sala los ciudadanos Magistrados Doctores Gladys María Gutiérrez Alvarado, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Luis Fernando Damiani Bustillos, Calixto Ortega Ríos y Tania D'Amelio Cardiet, a los fines de la instalación de la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada de la siguiente manera: Magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, Presidenta, Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, Vicepresidenta, y los Magistrados Luis Fernando Damiani Bustillos, Calixto Ortega Ríos y Tania D'Amelio Cardiet.

El 3 de junio de 2022, esta Sala dictó fallo, N.º 117, mediante el cual solicitó para mejor proveer que:

"(...)PRIMERO: Se ORDENA al Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, remitir de forma inmediata a esta Sala Constitucional, los informes relacionados con la situación social, el estado de salud y la ubicación de la niña, los cuales se les impuso que debería solicitar mensualmente al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Atures del Estado Amazonas, debiendo cumplirse dicho requerimiento dentro del lapso de cinco (5) días, contados desde el momento de su notificación, más un término de la distancia de seis (6) días.

SEGUNDO: Se le INFORMA, al Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, que los casos atendidos por esta Sala Constitucional se caracterizan por ser de alta relevancia y sus decisiones son de urgente y obligatorio cumplimiento, en vista de los derechos constitucionales que pudieren resultar afectados; por tanto, se le advierte al jurisdicente que la desatención a las órdenes impartidas por esta Sala, en el suministro inoportuno de las informaciones, datos o expedientes que solicitare, acarrea para el infractor la posibilidad de incurrir en desacato de la decisión judicial o desobediencia a la autoridad, sancionada con la multa establecida en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que prevé lo siguiente: (omissis)

TERCERO: Se ORDENA a la Secretaría de la Sala que, de conformidad con el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, practique las notificaciones acordadas en la presente decisión, de forma telefónica (...)"

El 14 de junio de 2022, el Secretario de la Sala Constitucional, abogado Carlos Arturo García Useche, dejó constancia en una nota secretarial, que se comunicó vía telefónica con el ciudadano Mario Alberto Marciano Escobar, titular de la cédula de identidad N.º V-14.258.647, quien se identificó como Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas y se le impuso del contenido del fallo N.º 117, dictado y publicado por esta Sala el 3 de junio de 2022. Igualmente, se procedió a remitir al correo electrónico mariaolbertomarciano@hotmail.com copia de la referida sentencia que le fuera notificada.

El 7 de julio de 2022 y 12 de agosto de 2022, el abogado Carlos Alberto Guerrero Quintana, en su calidad de Defensor Público Provisorio Segundo, con competencia para actuar ante las Salas Plena, Constitucional, Casación Civil, Casación Social, Político Administrativa y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, actuando como defensor público del ciudadano **HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO**, ya identificado, presentó, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, escritos con los cuales manifestó el interés procesal en el presente caso y solicitó pronunciamiento en la acción inominada constitucional, en la cual es parte su defendido. Se acordó agregar los referidos escritos al expediente respectivo.

El 27 de septiembre de 2022, vista la licencia autorizada por la Sala Plena de este Alto Tribunal al Magistrado Calixto Ortega Ríos y la incorporación de la Magistrada Michel Adriana Velásquez Grillet, esta Sala Constitucional, queda constituida de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, Vicepresidenta; Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, Magistrada Tania D'Amelio Cardiet y Magistrada Michel Adriana Velásquez Grillet.

El 4 de octubre de 2022, se reasignó la ponencia del presente expediente a la Magistrada **MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET**, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

El 14 de octubre de 2022, esta Sala dictó fallo N.º 746, mediante el cual requirió nuevamente para mejor proveer:

"(...)PRIMERO: Se ORDENA al Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, remitir de forma inmediata a esta Sala Constitucional, los informes relacionados con la situación social, el estado de salud y la ubicación de la niña, los cuales se les impuso que debería solicitar mensualmente al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Atures del Estado Amazonas, debiendo cumplirse dicho requerimiento dentro del lapso de cinco (5) días, contados desde el momento de su notificación, más un término de la distancia de seis (6) días.

Igualmente, se advierte al Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, que los casos atendidos por esta Sala Constitucional se caracterizan por ser de alta relevancia y sus decisiones son de urgente y obligatorio cumplimiento, en vista de los derechos constitucionales que pudieren resultar afectados; por tanto, se le advierte al jurisdicente que la desatención a las órdenes impartidas por esta Sala, en el suministro inoportuno de las informaciones, datos o expedientes que solicitare, acarrea para el infractor la posibilidad de incurrir en desacato de la decisión judicial o desobediencia a la autoridad, sancionada con la multa establecida en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que prevé lo siguiente: (omissis)

SEGUNDO: Se IMPONE al abogado Mario Alberto Marciano Escobar, titular de la cédula de identidad N.º V-14.258.647, en su condición de Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, para el 14 de junio de 2022, por no suministrar oportunamente la información solicitada por esta Sala Constitucional, una multa por la cantidad de ochocientos veinte bolívares (Bs. 820,00), ya que incurrió en el incumplimiento de lo ordenado por esta Sala Constitucional en el fallo N.º 0117, dictado y publicado por esta Sala el 3 de junio de 2022, del cual fue notificado el 14 de junio de 2022; correspondiente dicha multa al límite medio establecido en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la multa será pagada a favor de la Tesorería Nacional, en las oficinas del Banco Central de Venezuela o en cualquier institución bancaria o financiera receptora de fondos públicos. El referido funcionario sancionado deberá acreditar ante esta Sala el pago, mediante la consignación en cuotes del comprobante correspondiente, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, más un término de la distancia de seis (6) días. Todo ello sin perjuicio del derecho de descargo que tiene el sancionado, a tenor de lo previsto en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

TERCERO: Se ORDENA a la Secretaría de la Sala que, de conformidad con el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, practique la notificación acordada en la presente decisión, de forma telefónica(...)"

El 8 de noviembre de 2022, el Secretario de la Sala Constitucional, abogado Carlos Arturo García Useche, dejó constancia en una nota secretarial, que se comunicó vía telefónica con el ciudadano Mario Alberto Marciano Escobar, titular de la cédula de identidad N.º V-14.258.647, quien se identificó como Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas y se le impuso del contenido del fallo N.º 746, dictado y publicado por esta Sala el 14 de octubre de 2022. Igualmente, se procedió a remitir al correo electrónico mariaolbertomarciano@hotmail.com copia de la referida sentencia que le fuera notificada.

El 8 de noviembre de 2022, la Presidencia de la Sala emite el Oficio N.º TSJ/SCS/OFIC/1325-2022, remitiendo copia certificada de la sentencia N.º 746, dictada y publicada por esta Sala el 14 de octubre de 2022, al ciudadano Mario Alberto Marciano Escobar, Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas.

El 9 de noviembre de 2022, se recibió diligencia en la Secretaría de la Sala, mediante la cual el abogado Carlos Alberto Guerrero Quintana, actuando en su calidad de Defensor Público Provisorio Segundo con competencia para actuar ante las Salas Plena, Constitucional, Político Administrativa, Casación Civil, Casación Social y Electoral de este Máximo Tribunal, actuando como defensor público del ciudadano, **HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO**, con la cual solicitó copias certificadas de la decisión N.º 0746 del 14 de octubre del 2022, dictada por esta Sala.

El 10 de noviembre de 2022, la Presidencia de la Sala emite el Oficio N.º TSJ/SCS/OFIC/1330-2022, dirigido al Banco Central de Venezuela, con el cual se le informó que a través de la decisión N.º 746, del 14 de octubre de 2022, se le impuso al ciudadano Mario Alberto Marciano Escobar, titular de la cédula de identidad N.º V-14.258.647, multa por la cantidad de Bs. 820,00.

El 10 de noviembre de 2022, fue recibido en la Secretaría de esta Sala correo electrónico, desde la dirección coordinamamazonas@gmail.com a través del cual adjunta planilla de pago, forma 00016, a nombre del abogado Mario Alberto Marciano Escobar, contenido del pago de la multa por la cantidad de Bs. 820,00, que le fuera impuesta por esta Sala mediante decisión N.º 746 del 14 de octubre del 2022, dictada por esta Sala.

El 18 de noviembre de 2022, se dictó un auto acordando copia certificada de la sentencia N.º 746 del 14 de octubre del 2022, dictada por esta Sala, al abogado Carlos Alberto Guerrero Quintana, actuando en su calidad de Defensor Público Provisorio Segundo con competencia para actuar ante las Salas Plena, Constitucional, Político Administrativa, Casación Civil, Casación Social y Electoral de este Máximo Tribunal, actuando como defensor público del ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, ya identificado.

El 22 de noviembre de 2022, fue recibido el oficio N.º 244-22, del 14 de noviembre de 2022, suscrito por el abogado Mario Alberto Marcano Escobar en su condición de Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, mediante el cual remite original de la planilla de pago para abonar a la cuenta del Tesoro Nacional, Forma 00016, a nombre de ese servidor judicial, contentiva del pago de una multa por la cantidad de Bs. 820,00, impuesta por esta Sala Constitucional con la sentencia N.º 746 del 14 de octubre de 2022.

El 22 de noviembre de 2022, fue recibido desde el Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, el original del oficio distinguido con el N.º 195-22, del 15 de noviembre de 2022, emanado del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Autónomo Atures del Estado Amazonas, con el cual se informa que:

"... me dirijo a Usted, con la finalidad de dar respuesta al oficio N.º 243/22, de fecha 10 de noviembre de 2022, la cual fue recibida por ante este consejo en fecha 10 de noviembre de 2022; mediante el cual solicitan se les informe sobre la situación social, estado de salud y ubicación de la adolescente (...).

Al respecto le comunico que este Consejo de Protección se trasladó en las personas de Apolo López, Abogado, en su condición de Consejero Titular (...) y Alejandra Pérez, Abogada, Consejera Provisoria, (...) en compañía del Abogado José Bracho y Carlos Heredia, Secretario y Alguacil del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas respectivamente, a la casa de habitación de la ciudadana HILARIA DALILA GAMARRA DE CANDIA, abuela paterna de la adolescente (...) a fin de constatar situación social, estado de salud y actual ubicación de la referida adolescente, en virtud de a dicha ciudadana se le otorgó LA MEDIDA INNOMINADA DE CUIDO en fecha 17 de enero de 2017, según riel en autos al folio 25.

Ahora bien, en el presente procedimiento se realizó entrevista a la ciudadana HILARIA DALILA GAMARRA DE CANDIA, abuela paterna de la adolescente (...) la misma manifestó que desconoce la ubicación exacta de la adolescente (...). Expresó que su nieta se fue de su casa con un joven con el que se metió a vivir en pareja y la última comunicación entre ellas fue a través de la red social Facebook en octubre de 2021, a través del cual ella escribió un hola pero nunca obtuvo respuesta, lo último que supo fue que estaban fuera del Estado..."

El 8 de diciembre de 2022, el abogado Carlos Alberto Guerrero Quintana, en su calidad de Defensor Público Provisorio Segundo, con competencia para actuar ante las Salas Plena, Constitucional, Casación Civil, Casación Social, Político Administrativa y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, actuando como defensor público del ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, ya identificado, presentó, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, escrito con el cual manifestó el interés procesal en el presente caso y solicitó pronunciamiento en la acción innominada constitucional, en la cual es parte su defendido. Se acordó agregar los referidos escritos al expediente respectivo.

El 14 de diciembre de 2022, esta Sala dictó fallo N.º 1181, mediante el cual nuevamente solicitó para mejor proveer lo siguiente:

"(...) 1.- Se ORDENA nuevamente al Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, remitir de forma inmediata a esta Sala Constitucional, los informes relacionados con la situación social, el estado de salud y la ubicación de la niña, los cuales se les impuso que debería solicitar mensualmente al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Atures del Estado Amazonas, debiendo cumplirse dicho requerimiento dentro del lapso de cinco (5) días, contados desde el momento de su notificación, más un término de la distancia de seis (6) días.

2.- Se ADVIERTE al Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, que los casos atendidos por esta Sala Constitucional se caracterizan por ser de alta relevancia y sus decisiones son de urgente y obligatorio cumplimiento, en vista de los derechos constitucionales que pudieren resultar afectados; por tanto, se le advierte al jurisdicente que la desatención a las órdenes impartidas por esta Sala, en el suministro oportuno de las informaciones, datos o expedientes que solicitare, acarreen para el infractor la posibilidad de incurrir en desacato de la decisión judicial o desobediencia a la autoridad, sancionada con la multa establecida en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

3.- Se ORDENA a la Secretaría de la Sala que, de conformidad con el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, practique la notificación acordada en la presente decisión, de forma telefónica (...).

El 15 de diciembre de 2022, el Secretario de la Sala Constitucional, abogado Carlos Arturo García Useche, dejó constancia en una nota secretarial, que se comunicó vía telefónica con el ciudadano Mario Alberto Marcano Escobar, titular de la cédula de identidad N.º V-14.258.647, quien se identificó como Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas y se le impuso del contenido del fallo N.º 1181, dictado y publicado por esta Sala el 14 de diciembre de 2022. Igualmente, se procedió a remitir al correo electrónico marioalbertomarcano@hotmail.com copia de la referida sentencia que le fuera notificada.

El 15 de diciembre de 2022, la Presidencia de la Sala emite el Oficio N.º TSJ/SCS/OFIC/1558-2022, remitiendo copia certificada de la sentencia N.º 1181, dictada y publicada por esta Sala el 14 de diciembre de 2022, al ciudadano Mario Alberto Marcano Escobar, Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas.

El 23 de enero de 2023, fue recibido en la Secretaría de esta Sala correo electrónico, desde la dirección coordinopnamazonas@gmail.com a través del cual se remite adjunto el Oficio N.º 01-23, del 11 de enero de 2023, suscrito por el ciudadano Mario Alberto Marcano Escobar, Juez Coordinador del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado Amazonas, con el cual se remitió información solicitada y ordenada por esta Sala en la sentencia N.º 1181, del 14 de diciembre de 2022, en el cual se expuso lo siguiente:

"... es propicia la ocasión para dar cumplimiento a la notificación que me hiciera la Secretaría de la Sala Constitucional vía llamada telefónica en fecha 19/12/2022. A tal efecto, hago del conocimiento de la honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que los informes mensuales requeridos al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Autónomo Atures del Estado Amazonas, que guardan relación con el caso de la adolescente (...) seguido en el expediente nomenclatura 17-1100, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, no fueron realizados en su debida oportunidad; debido a que la adolescente antes referida cambió su lugar de residencia, trasladándose junto a su pareja a la República de Colombia (Pueblos Aledaños a la frontera con Venezuela), desconociéndose a la fecha su ubicación exacta, tal y como se desprende de la comunicación identificada con el N.º 226-2022, fechada 21 de Diciembre del año 2022, emanada del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Atures del Estado Amazonas, suscrita por el ABG. APOLO LÓPEZ, en su carácter de Consejero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. No obstante, de la revisión exhaustiva realizada a la causa nomenclatura EJ-3210, llevada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, se constató la elaboración de siete (07) informes técnicos psicosociales y de seguimiento y control realizados por los profesionales del equipo Multidisciplinario adscritos a este Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, fechados 18/12/2018, 31/01/2019, 21/02/2019, 20/03/2019, 08/04/2019, 08/03/2019 y 11/10/2019, los cuales se remiten adjunto a la presente misiva en copia certificada, a los fines legales conducentes. Es importante resaltar, que de los autos del expediente se evidencia que no reposan informes de seguimiento y control durante los años subsiguientes, en virtud de la pandemia y consecuente confinamiento decretado por el Ejecutivo Nacional, y en razón del cambio de residencia realizado por la adolescente (...) el cual se materializó en fecha 09/03/2023, según información aportada por la ciudadana: HILARIA DALILA GAMARRA DE CANDIA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N.º 8.907.005, en su carácter de abuela paterna..."

El 30 de enero de 2023, el abogado Carlos Alberto Guerrero Quintana, en su calidad de Defensor Público Provisorio Segundo, con competencia para actuar ante las Salas Plena, Constitucional, Casación Civil, Casación Social, Político Administrativa y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, actuando como defensor público del ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, ya identificado, presentó, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, escrito con el cual manifestó el interés procesal en el presente caso y solicitó pronunciamiento en la acción innominada constitucional, en la cual es parte su defendido. Se acordó agregar los referidos escritos al expediente respectivo.

El 8 de febrero de 2023, se recibe resulta de la entrega del oficio N.º TSJ/SCS/OFIC-1558-2022, del 15 de diciembre de 2022, dirigido al ciudadano Mario Alberto Marcano Escobar, Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, con el cual se le emitió copia certificada de la decisión N.º 1181, del 14 de diciembre de 2022, dictada por esta Sala.

El 28 de febrero de 2023, se recibe resulta de la entrega del oficio N.º TSJ/SCS/OFIC 1325-2022, del 8 de noviembre de 2022, dirigido al ciudadano Mario Alberto Marcano Escobar, Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, con el cual se le emitió copia certificada de la decisión N.º 746, del 14 de octubre de 2022, dictada por esta Sala.

El 28 de febrero de 2023, se recibe resulta de la entrega del oficio N.º TSJ/SCS/OFIC-1330-2022, del 10 de noviembre de 2022, dirigido al Banco Central de Venezuela, mediante el cual se le informó que a través de la decisión N.º 746, del 14 de octubre de 2022, se le impuso al ciudadano Mario Alberto Marcano Escobar, titular de la cédula de identidad N.º V-14.258.647, multa por la cantidad de Bs. 820,00.

El 28 de febrero de 2023, 28 de marzo de 2023, 27 de abril de 2023, 30 de mayo de 2023, 30 de junio 2023, 31 de julio de 2023, 11 de agosto de 2023 y el 27 de septiembre de 2023, el abogado Carlos Alberto Guerrero Quintana, en su calidad de Defensor Público Provisorio Segundo, con competencia para actuar ante las Salas Plena, Constitucional Casación Civil, Casación Social, Político Administrativa y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, actuando como defensor público del ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, ya identificado, presentó, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, escritos con los cuales manifestó el interés procesal en el presente caso y solicitó pronunciamiento en la acción innominada constitucional, en la cual es parte su defendido. Se acordó agregar los referidos escritos al expediente respectivo.

I ANTECEDENTES

Del estudio del presente expediente se desprenden los siguientes antecedentes:

1. El 23 de noviembre de 2016, una ciudadana llamada "Carmen", únicamente identificada como maestra en el Colegio "Madre Carmen Mazzarello", ubicado en la ciudad de Puerto Ayacucho, acudió a la Delegación Estatal Amazonas, Sub-Delegación Puerto Ayacucho del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, donde ante el detective Rafael Escobar denunció que una niña que estudia en dicha institución le informó que había sido abusada sexualmente, en múltiples ocasiones, por su padrastro HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, que los hechos habían ocurrido en su vivienda ubicada en la Comunidad "Las Pavas", caserío Piaroa de dicha entidad federal.

2. El 23 de noviembre de 2016, se realizó una entrevista policial a la niña quien expuso "el día de ayer, lunes, estaba dormida en mi casa, cuando de repente mi padrastro de nombre HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, comenzó a golpearme y regañarme. Luego de eso comenzó a quitarme la ropa y abuso (sic) de mí, luego el día (sic) de hoy se lo comente (sic) a una maestra quien me trajo para acá". Tras lo cual, el licenciado Pedro Delgado, Jefe de la Sub-Delegación Policial de Puerto Ayacucho solicitó al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMF) del Estado Amazonas que se realizara el examen médico legal (físico-vagino-rectal) a la niña, el cual fue practicado en la misma fecha por el Dr. José Arianna Mirabal, Experto Profesional Especialista II, concluyendo que se trata de una "paciente de sexo femenino de 11 años de edad, de raza mestiza, que al momento del examen presenta. Examen físico: ausencia de vello púbico, genitales externos inmaduros, de aspecto y configuración normal. Himen anular con desgarramiento antiguo a las 5 y 6 según distribución horaria". Por lo cual, consideró que en la niña se había producido una desfloración antigua.

3. El 23 de noviembre de 2016, siendo las 13:00 horas de ese día, según lo asentado en Acta de Investigación Penal, el detective Rafael Escobar y el Detective Agregado Jackson Vásquez, procedieron a realizar una revisión técnica del lugar donde se encontraba el ciudadano, así como a detenerlo, una vez realizada la lectura de sus derechos y efectuarle una revisión corporal. Trasladándose a continuación a la sede policial donde notificaron de la detención al Abogado Luis Correa, Fiscal Quinto de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Amazonas.

4. El 25 de noviembre de 2016, el Abogado Luis Correa, Fiscal Quinto de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Amazonas, notificó al Juez de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas sobre la detención del ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, así como le explicó que su privación de libertad se hace por la presunta comisión de delitos previstos en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, solicitando en consecuencia que se realice la Audiencia de Presentación del mismo, de conformidad con lo previsto en la norma adjetiva penal.

5. El 25 de noviembre de 2016, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, da por recibido el asunto y solicitó que sea designado un Defensor Público para el ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO.

6. El 25 de noviembre de 2016, se realizó la audiencia de presentación del ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, en la cual el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas declaró con lugar la solicitud fiscal y calificó la aprehensión en flagrancia del ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, ordenó que el proceso penal se desarrolle de conformidad con las normas previstas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, declaró con lugar la prueba anticipada solicitada por la Fiscalía y mantuvo la privación judicial preventiva de libertad del referido ciudadano.

7. El 7 de febrero de 2017, se desarrolla la Audiencia Preliminar del presente asunto, en la cual, al manifestar el ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, que pertenece a la etnia indígena *Guotoja* y que no entiende plenamente el castellano, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 139 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas y se le nombra a un intérprete. Seguidamente, procede la representación del Ministerio Público a presentar escrito de acusación en contra del ciudadano por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual a Niña con penetración, agravado y continuado, según lo previsto en el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como a promover las pruebas en las cuales sustenta su acusación para que sean ventiladas en la fase procesal correspondiente. Del mismo modo, al finalizar dicha audiencia, el Tribunal Penal de Primera Instancia en Funciones de Control del Estado Amazonas admitió la Acusación Fiscal, explicó al imputado la existencia del procedimiento especial por la admisión de hechos, al cual, el ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, manifestó no querer acogerse. Por lo cual, se procedió a ordenar el pase a juicio de dicha causa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 312 del Código Orgánico Procesal Penal.

8. El 1 de mayo de 2017, un grupo que se denominan *Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad Huottöja Ahuiyaru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas"* Itasode Jueipocattö Täbotö Roechuome Ahuiyaru Tuhuo'cho Reje, conformado por los ciudadanos José Manuel Ochoa, titular de la cédula de identidad N.º V-8.444.344, identificado como Autoridad Legítima; José Manuel García, titular de la cédula de identidad N.º V-8.9.01.112, identificado como Autoridad Legítima; José Gregorio Muñoz, titular de la cédula de identidad N.º V-8.903.423, identificado como Autoridad Legítima; Juan Martínez, titular de la cédula de identidad N.º V-15.499.867, identificado como Capitán; Antonio Rogelio Palacio, titular de la cédula de identidad N.º V-10.605.226, identificado como Cacique; Enrique Martínez Gómez, titular de la cédula de identidad N.º V-18.835.950, identificado como Secretario y Rogelio Ochoa Soto, titular de la cédula N.º V-12.629.899, actuando como Intérprete, realizaron un juicio, en una sola audiencia, en la cual valoraron los hechos que conforman la presente causa y dictaron una sentencia cuya dispositiva se transcribe a continuación:

"(...) Por todos estos motivos de hecho y de derecho este Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad Huottöja Ahuiyaru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jueipocattö Täbotö Roechuome Ahuiyaru Tuhuo'cho Reje, administrando justicia y en nombre de la ley, usos, costumbres de nuestra cultura ancestral y tomando en consideración todos los elementos probatorios meticulosamente analizados como fueron; las Testimoniales, Informes Médicos Forenses, Socio Antropológicos y nuestras máximas experiencias (sic) toma la siguiente decisión:

Primero: Se declara **INADMISIBLE** el delito de violación imputando (sic) a HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, en contra de (se omite en virtud del artículo 65 de Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).

Segundo: Por lo tanto no es procedente la aprensión (sic) en flagrancia en contra de HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO.

Tercero: Este Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena considera sumamente delicado y grave que al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO se le haya privado de libertad hasta la presente fecha, únicamente con el fundamento de unas pruebas testimoniales, que de las mismas se derivaba que los actos sexuales fueron realizados supuestamente por cuatro personas más, existiendo la duda razonable sobre si la desfloración antigua como lo refleja el informe médico forense, se debió a contacto con un presunto novio u otros individuos, debido al análisis de la conducta de (se omite en virtud del artículo 65 de Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).

Cuarto: Esta Jurisdicción Especial Indígena considera que la Jurisdicción Ordinaria, violó (sic) el derecho al Debido Proceso establecido en el numeral 4 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, al negársele la jurisdicción ordinaria ser juzgado por sus Jueces Naturales en la jurisdicción Especial Indígena a pesar de que fue solicitado por la Defensa en la Audiencia Preliminar, para que se remitiéra el caso a la misma. Por lo que este Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad Huottöja Ahuiyaru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jueipocattö Täbotö Roechuome Ahuiyaru Tuhuo'cho Reje exhorta a los tribunales ordinarios que cuando traten de estos casos, se remitan las causas a la jurisdicción especial indígena.

Quinto: Este Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena rechaza y condena la violación del hogar de la familia Solano, ya que no existía orden judicial de allanamiento para que se pudiese allanar este hogar. En donde incluso por esta acción fue sustratada una Computadora Canaima de una de sus hermanastras. Por lo que de conformidad con el artículo 47 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela debe remitirse este expediente al Ministerio Público para que proceda en consecuencia por no haberse garantizado el Derecho sobre la inviolabilidad del hogar doméstico.

Sexto: El Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad Huottöja Ahuiyaru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" le llama la atención, la admisión de las pruebas anticipadas presentadas por la parte fiscal del ministerio público (sic), las cuales no fueron sometidas a ningún tipo de contradictorio y control de la prueba en la jurisdicción ordinaria. Incluso considera esta jurisdicción especial que las pruebas anticipadas debían versar sobre la práctica de un "reconocimiento, inspección o experticia, que por su naturaleza y características deban ser considerados como actos definitivos e irreproducible o cuando deba recibirse una declaración que, por algún obstáculo difícil de superar, de persona que no podrá hacerse durante el juicio." Todo ello de

conformidad con el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal. Por lo que este tribunal considera que la Jurisdicción Ordinaria no ha debido admitir las testimoniales ni la misma experticia médico forense como pruebas anticipadas, debido al no haber contradictorio y el control de las pruebas en la Audiencia de Juicio Oral, se está violentando el debido proceso y más grave aún el derecho a la defensa, por considerar que todo lo alegado en la prueba anticipada, fue admitido como cierto, quedándole al presunto imputado (sic) en una certeza de que se le declare culpable, con unas pruebas contradictorias en sus testimoniales y que no dan certeza de que haya sido todo lo contrario tal como se desprende del informe médico forense del CICPC.

Séptimo: Este Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad Huottöja Ahuiyaru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" por todos estos motivos de hecho y de derecho **ABSUELVE** al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, del delito de **VIOLACIÓN**, tipificado en el artículo 374 del Código Penal en contra de (...), por lo que remite la presente sentencia al tribunal de la jurisdicción especial ordinaria (sic) que este (sic) conociendo de la presente causa, para bajo el principio de colaboración entre los órganos jurisdiccionales (jurisdicción especial indígena y jurisdicción ordinaria) ordene la remisión de la respectiva **BOLETA DE EXCARCELACIÓN** al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, titular de la cédula de identidad N.º V-13.058.323, por haber sido **ABSUELTO** en la presente causa.

Octavo: En caso de que la jurisdicción ordinaria resuelva o decida la presente causa en discordancia o de forma contradictoria con esta sentencia, o continúe el juicio ya decidido por la Jurisdicción Especial Indígena, deben remitirse esta sentencia y la causa en el estado que se encuentre al Tribunal Supremo de Justicia para que conozca del presente asunto, ya que se estaría planteando un Conflicto de Jurisdicción, todo ello de conformidad con el numeral 3 del artículo 134 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.

Noveno: Se remite la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo para que de acuerdo a sus atribuciones y competencias de ley en defensa de los Pueblos y Comunidades Indígenas, así como de los Derechos Ambientales de todos nosotros, sea garante por el cumplimiento y acatamiento de la presente sentencia". (sic)

9. El 18 de mayo de 2017, según narra el grupo de ciudadanos que se denomina *Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad Huottöja Ahuyäru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jueipocattö Täbotö Roechuome Ahuyäru Tuhuo'cho Reye*, la ciudadana Melania Muñoz, en su condición de concubina del ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, interpuso una acción de amparo en la modalidad de *habeas corpus*, en el cual expuso que considera que la privación judicial preventiva de libertad que se le ha impuesto al ciudadano violenta sus derechos como indígena y que, en consecuencia, ha de ser liberado. Dirigiéndose el 31 de mayo siguiente a la delegación de la Defensoría del Pueblo del Estado Amazonas solicitando su participación en tanto su actuación judicial no ha generado la activación del señalado recurso.

10. El 20 de septiembre de 2017, el Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas decide remitir esta causa al Tribunal Supremo de Justicia, tal como establece la dispositiva que a continuación se transcribe:

"... Este Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal en Funciones de Juicio, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite los siguientes fundamentos:

Primero: Se plantea Conflicto de competencia de conocer, en relación a la jurisdicción especial indígena en la presente causa seguida al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, titular de la cédula de identidad N° 13.058.323, por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual a Niña con penetración, agravado y continuado, según lo previsto en el artículo 259 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente con la agravante establecida en el artículo 217 ejusdem, en perjuicio de la niña (identidad omitida) de conformidad con lo establecido en el artículo 134.3 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, dada la consignación en autos y en original a los folios 4 al 44 de la Pieza II; sentencia emitida por el Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad Huottöja Ahuyäru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jueipocattö Täbotö Roechuome Ahuyäru Tuhuo'cho Reye, Municipio Atares del Estado Amazonas, remitida a este Juzgado por la Presidencia del Circuito Judicial.

Segundo: Se suspende la presente causa y se acuerda la remisión inmediata de las actuaciones conducentes a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que decida a que Tribunal corresponde la competencia para juzgar el presente caso". (sic)

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Debe esta Sala, como punto previo, rememorar que sobre el caso de marras, el 28 de junio de 2018, se dictó la sentencia N.º 437, mediante la cual, entre otras cosas, realizó una reconducción de la calificación jurídica de la demanda incoada a una Acción Innomiada de Naturaleza Constitucional, toda vez que los derechos fundamentales cuya protección se pretende, no poseen ninguna legislación regulatoria propia, por encontrarse desprovistos de un procedimiento judicial que permita su efectiva tutela.

Del mismo modo, en esa decisión referida esta Sala se declaró competente para conocer de la acción innominada de naturaleza constitucional incoada por el grupo de ciudadanos que se denominan *Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad "Huottöja Ahuyäru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jueipocattö Täbotö Roechuome Ahuyäru Tuhuo'cho Reye"*; así como también se admitió la citada acción innominada de naturaleza constitucional interpuesta, en la cual entre otros aspectos, el Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena mencionado plantea su jurisdicción para juzgar al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO.

Al momento de hacerlo, esta Sala realizó un extenso estudio sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en especial, en aquellos vinculados con la valoración de su derecho y de sus mecanismos de justicia.

Señaló en tal ocasión este máximo decisor que: *"... se evidencia que la Constitución de 1999 rompe con la tradición constitucional latinoamericana de negar la existencia real e histórica de las comunidades indígenas, así como, la resistencia de pueblos que habían sido dominados y sojuzgados, no tan sólo con las armas sino también a través de la imposición de culturas que les eran desconocidas y negaban las suyas. Por ende, este añadido constitucional no tan sólo constitucionaliza en Venezuela: algunas de*

las demandas más sentidas por los pueblos indígenas, sino que se constituye en un elemento fundamental para la noción de justicia que incorpora la vigente Carta. Esta ruptura se inscribe en la concepción de justicia con la que se cierra el siglo XX, en la cual se deja de lado la pretensión de una nación única, uniformemente compuesta y coactivamente impuesta, en muchas de nuestras naciones".

De este modo, el Constituyente dotó a nuestra carta magna de una visión intercultural de la realidad, la cual impacta toda la construcción social y jurídica de la Nación Venezolana, siendo entonces necesario y preciso que esta Sala, en su condición de máximo y último intérprete de la Constitución determine de manera inequívoca en qué consiste este atributo de nuestro ordenamiento jurídico.

Con tal propósito, se examina la visión planteada por Esteban Emilio Mosonyi, en su libro *"Identidad Nacional y Culturas Populares"*, publicado por la Universidad Central de Venezuela. Dirección de Cultura. Editorial La Enseñanza Viva, 1982, páginas 23 y 24, según la cual: *"la diversidad cultural se fundamenta en la diferencialidad del acontecer humano, ya que no se trata de una sola sociedad, y las relaciones del hombre como especie no pueden circunscribirse a un solo modelo societario. La teoría general de las sociedades (TGS), asume esa diferencialidad de las creaciones humanas, y plantea que las sociedades —que en un momento dado pudieron entrar en contacto— no pierden sus orígenes, desarrollo y ámbito de proyección histórica. Asimismo, la evolución de la humanidad tampoco ocurre en una sola línea u orden evolutivo, esa evolución acontece y ocurre por distintas líneas superando el esquema evolutivo unilineal: de una sociedad primitiva, después esclavista, luego feudal, capitalista, para desembocar en etapas superiores".*

Ahora bien, en el caso de Venezuela como en el de otros Estados latinoamericanos, que han reconocido su carácter multiétnico y pluricultural, el proceso de reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas no atentó contra la soberanía del Estado, sino que como explica Jorge Alberto González Galván, más bien la complementó, enriqueciendo la estructura y el desarrollo del sistema constitucional, así como el catálogo de los derechos humanos reconocidos y garantizados, así lo exploramos en su obra *"Derechos de Los Indígenas"*, Editorial: III. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México UNAM, 2018, Páginas 39 y 40, en la que se lee: *"... las demandas de los pueblos indígenas, puesto que se plantean al interior del Estado nacional, no pretenden provocar la desunión de toda la población, ni la separación del territorio del país, sino que se entienda, al incluir el respeto a las diferencias culturales, que la noción de unicidad e indivisibilidad del poder político republicano no puede seguir excluyendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas..."*.

Igual en Venezuela, cuando debemos analizar la interrelación del derecho de los pueblos indígenas con el derecho nacional, repasamos lo explicado por Jorge Alberto González Galván, en el artículo *"La Validez del Derecho Indígena en el Derecho Nacional"* dentro del Libro *"Comentarios a la Reforma Constitucional en Materia Indígena"*, Editorial: III. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México UNAM, 2002, Página 45. *"... El derecho indígena, entendido como el derecho de los pueblos indígenas a concebir y aplicar sus normas internas está validado por el derecho nacional cuando se establece que en "la aplicación de sus sistemas normativos". En esta frase se está reconociendo que en los pueblos indígenas existen normas concebidas y aprobadas por ellos mismos, y que en su aplicación, o sea, en su derecho a la *juris dictio* (su derecho a decir el derecho), es válido también siempre y cuando se respeten los derechos humanos. La iniciativa y el dictamen mencionan en especial los de las mujeres, pero entiendo que por derechos humanos se incluyen los derechos de las mujeres y a todas las garantías sociales e individuales vigentes. La iniciativa establece que los juicios, procedimientos y decisiones de las autoridades judiciales indígenas serán convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado. El dictamen sustituye "convalidados" por validados (*idem*). Considero que al reconocer a los pueblos indígenas como entes de derecho público, como parte del Estado (...), sus juicios, procedimientos y resoluciones están sujetos a respetar la legislación vigente y por tanto a someterlos, como los de cualquier autoridad, no a la convalidación, validación u homologación de otra autoridad, sino a su revisión por un órgano jurisdiccional del Estado..."*.

También sobre este tema es acertado reseñar lo planteado por Juan Carlos Morales Manzur y Lucrecia Morales García, en su artículo *"El derecho a la participación de las minorías indígenas venezolanas dentro del marco legal de 1999"* dentro de la Revista *Frónesis*, Vol.10, N.º 2, Instituto de Filosofía del Derecho. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia, agosto de 2003, página 20, en el cual expresaron: *"... Como reflejo de la realidad internacional y de la cada vez mayor defensa de los derechos de los pueblos indígenas, el marco legal venezolano es modificado con la nueva Constitución elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente y aprobada el 15 de diciembre de 1999, mediante referéndum, que institucionaliza el pleno y cabal derecho social, político y económico de los pueblos indígenas en el país y la existencia de un estado plurinacional y pluricultural. Como puede deducirse, la nueva Carta Magna se fundamenta en la realidad pluricultural indígena que da cabida a las instituciones y a los sistemas jurídicos propios de los pueblos enraizados en el territorio venezolano..."*.

Si bien está configurada la condición de Venezuela como un Estado multiétnico y pluricultural, tal como quedó fijada en el preámbulo de la Constitución, en lo normativo abrió el espacio para treinta y nueve menciones directas a los pueblos indígenas en el articulado constitucional, entre las que se destacan, en el caso de marras; lo jurídico y lo jurisdiccional, en tanto, lo crucial es determinar cuál es el derecho aplicable y la jurisdicción que puede imponerle en el caso seguido contra el ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, que es el tema que hoy nos ocupa en esta Sala Constitucional.

Al respecto, es vital tomar en cuenta el reconocimiento del derecho indígena y su jurisdicción, el cual compartimos con múltiples textos constitucionales y legales nacidos en las últimas décadas del siglo XX y que cada vez son más numerosos en el siglo XXI, y generan nuevas realidades jurídicas altamente complejas.

Sobre este tema nos explica sobre el dualismo del derecho entre indígena y no indígena el autor José Roldán Xopa, en el artículo "Municipio y Pueblos Indígenas, ¿Hacia Un Mestizaje Jurídico?" dentro del Libro Serie Doctrina Jurídica, Núm. 92. Editorial IJ. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México UNAM, 2002, Páginas 250 y 251, lo siguiente: "... Si bien el empleo del dualismo "indígena" y "no indígena" tiene como utilidad señalar los rasgos genéricos de dos órdenes normativos de diversa procedencia, la juridificación del primero (su conversión a derecho positivo) tiene también como consecuencia su conformación como parcela del derecho nacional. No obstante su diversidad (su carácter consuetudinario, su énfasis comunitario, etcétera), la recepción legal y constitucional que del mismo se hace, desencadena un proceso de ubicación en el sistema de fuentes del derecho (...), cuya base común de validez es la Constitución. Se verifica, pues, más que un proceso de pluralismo jurídico, una vía de mestizaje jurídico, en el que el dualismo tiende a disolverse..."

Un razonamiento que esta Sala comparte, en tanto, se demuestra que el derecho indígena no es un asunto menor o extraño, sino que forma parte misma del corazón normativo de la República, como lo indica el artículo 126 de nuestra Constitución que señala:

"Artículo 126. Los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional. El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional".

Tal criterio ha sido analizado por esta Sala, en la sentencia N.º 2 del 3 de febrero de 2012, (Caso: "Niño Warao"), en la cual se expuso:

"Ahora bien, el carácter pluricultural aceptado en la Constitución de 1.999, conlleva necesariamente a superar la concepción tradicional monista del Derecho, permitiendo la incorporación del pluralismo jurídico o legal, que reconoce la coexistencia de diferentes

sistemas jurídicos dentro de un mismo espacio, bajo la rectoría única del texto constitucional como vértice final de ambos sistemas. En la Asamblea Nacional Constituyente de 1.999, participó en la elaboración originaria del proyecto de la Constitución, la representación social de ambas realidades culturales; la representación indígena fue conformada por el uno por ciento (1%) de la población total del país, según se lee de las Bases Comiciales para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.

... Omissis...

Es decir, la propia Constitución hace énfasis en las reglas que se han de seguir para la armonización de los dos sistemas jurídicos: 1) el derecho originario indígena se aplica: a) dentro del hábitat, b) con base en sus tradiciones ancestrales, y c) a los integrantes de su comunidad; y 2) el alcance de derecho originario indígena se limita en el caso de contrariar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley y el orden público. Con una aclaratoria adicional y es el derecho a la participación política de los pueblos indígenas consagrados en el artículo 125 constitucional, y en razón de la cual el Estado garantiza la participación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes en las entidades federales y locales con población indígena.

... Omissis...

Tales premisas constitucionales deben ser tomadas en cuenta por esta Sala Constitucional, y con carácter vinculante para todos los Tribunales de la República, a los fines de adoptar sus decisiones en resguardo de las costumbres ancestrales de los pueblos indígenas ubicados en el territorio nacional.

ALCANCE Y CONTROL CONSTITUCIONAL SOBRE EL DERECHO ORIGINARIO O CONSUECUDINARIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Como la Sala señaló supra, a pesar de que el Estado venezolano reconoce la existencia del derecho originario o prehispánico de los pueblos indígenas (consuetudinario y ancestral), contenido en la "Jurisdicción Especial Indígena", debe aplicarse dentro de los parámetros constitucionales establecidos en el artículo 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es conforme con el artículo 8.2 del Convenio 169 de la OIT, que a la letra dice:

"Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio".

En la legislación venezolana se observa que el artículo 131 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas del 2005, define el derecho originario o consuetudinario indígena en los siguientes términos:

... Omissis...

De este modo, la ejecución del derecho propio de los pueblos indígenas no puede ser incompatible con los derechos fundamentales definidos en el ordenamiento jurídico constitucional, por lo que ha resultado necesaria una coordinación jurídica entre los dos sistemas normativos, todo ello en razón de que la vigilancia por el respeto de los derechos humanos le compete al Estado a través de sus distintos Poderes Públicos. Ejemplo de ello, es que el reconocimiento de los pueblos indígenas, así como la existencia de su derecho, también es de la competencia del Poder Nacional como lo estableció la Sala en la sentencia N.º 597, del 26 de abril de 2011, caso: Carlos Burali Morán y otros, en los siguientes términos:

... Omissis...

Además, la Sala destaca que la coordinación que debe existir entre la Jurisdicción Especial Indígena y el derecho estatal, debe atender al principio de legalidad, como lo señala literalmente el artículo 260 de la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela, por lo que la coordinación de los distintos sistemas jurídicos es de reserva legal, ya que la ley es el único instrumento jurídico que desarrolla esa coordinación (Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otras), sin menoscabo de que la Sala Constitucional, como máxima y última intérprete de la Constitución, complementa los vacíos legales o legislativos, en el ejercicio de la jurisdicción normativa que tiene atribuida la Sala Constitucional (véase la sentencia de esta Sala N.º 1.325 del 4 de agosto de 2011).

De modo que, la Sala establece, con carácter vinculante, que el derecho originario o consuetudinario de los pueblos y comunidades indígenas se encuentra integrado al ordenamiento constitucional vigente, y por ende, no puede ser contrario, a las normas, reglas y principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En definitiva, el derecho propio y originario de los pueblos indígenas integra el ordenamiento jurídico y, como tal debe estar enmarcado en los principios, reglas y derechos contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; así como en el respeto del bloque constitucional, el cual contiene los distintos pactos, tratados y acuerdos internacionales ratificados por la República. Se trata de brindar cobertura constitucional al hecho de que el sistema jurídico de las comunidades indígenas está integrado a la vida social, económica y política del país, tal como lo señala la Carta Magna; lo cual implica que dentro de su proceso evolutivo, el derecho originario consuetudinario indígena, hoy día no escapa de las garantías que el Derecho Constitucional impone para el respeto de la condición humana.

En efecto, el derecho propio originario de los pueblos de indígenas no es hoy el mismo de otrora, por cuanto los problemas o fenómenos sociales que se presentan en las diversas etnias indígenas también se han transformado con el transcurso del tiempo, y no puede ser ajeno a la complejidad del "espíritu del tiempo" (Zeitgeist), lo que obliga a los integrantes de las comunidades indígenas a adoptar, si es posible, nuevas posturas ante la ocurrencia de nuevas situaciones.

... Omissis...

Además, de modo complementario, la Sala hace notar que, conforme al principio de la supremacía de la Constitución, lo señalado en la Carta Magna debe ser considerado como norma fundamental del Estado, por lo que toda normativa existente en Venezuela debe estar subordinada al Texto Fundamental y, en ningún caso, puede contrariar su contenido, facultándose al Juez o Jueza a ejercer el control difuso de la constitucionalidad y a desaplicar la norma contraria a la Constitución (artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)...". (Negritas y mayúsculas propios del fallo).

Ahora bien, reconocido a los pueblos indígenas su cultura y su derecho, como ha sido, desde el carácter constitucional y constitutivo de la Nación venezolana, también la Sala Constitucional ha observado situaciones jurídicas en las cuales, se bordean con el derecho indígena los límites de materias especialmente protegidas, en específico, la Sala, mediante Sentencia N.º 1.325, dictada el 4 de agosto de 2011, (Caso: "Carlos Eduardo Ramos Vargas") se pronunció determinando que las materias relacionadas con violencia de género, cuando las víctimas mujeres sean indígenas, en virtud de desarrollarse de conformidad con lo establecido en tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, debían ventilarse ante la jurisdicción especializada en esta rama y no ante la jurisdicción indígena, y se estableció con carácter vinculante que: "... reafirma la competencia de la jurisdicción especial en materia de género para el juzgamiento de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con independencia de que el sujeto activo sea un ciudadano indígena...", estableciendo lo siguiente:

"... Ello así, la Sala considera que tales disposiciones legales vigentes en Venezuela deben ser aplicadas por las autoridades del Estado venezolano, pues constituyen inequívocamente el reconocimiento y existencia de la Jurisdicción Especial Indígena, regida por sus tradiciones ancestrales y propios respecto de los miembros de sus comunidades, debiendo entenderse actualmente esta jurisdicción no desde el punto de vista formal, tal y como está estructurado el ordenamiento jurídico y jurisdiccional ordinario, sino como un conjunto de tradiciones y pautas étnico-culturales que lo rigen y que no han sido creadas por las leyes venezolanas ni internacionales, sino que por el contrario, han sido reconocidas por éstas. Son de esta manera, normas consuetudinarias que coexisten con el ordenamiento jurídico formal, y que tienen regulaciones para su aplicación, amén de dicha convivencia jurídica legal, no significando ello que tales sujetos de derechos estén excluidos de los deberes, derechos y garantías constitucionales presentes en los procedimientos ordinarios en materia de resolución de conflictos.

Con atención a ello, si bien es cierto que la Jurisdicción Especial Indígena existe y es reconocida por el ordenamiento jurídico patrio; siendo de aplicación preferente en ciertos casos, no es menos cierto que tal aplicación está delimitada igualmente, tanto por los Convenios internacionales como por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes especiales.

... Omissis...

En este sentido, el ya citado artículo 9 numeral 1º del Convenio OIT N.º 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y el artículo 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya citados supra, establecen que se podrá aplicar la usanza, práctica o costumbre indígena tradicional para la resolución de conflictos o delitos, siempre que esta no transgreda o en modo alguno colide con el ordenamiento jurídico nacional u orden público.

... Omissis...

Así entonces, el propósito del legislador con esta disposición es que las autoridades legítimas de los pueblos indígenas sean solo órganos receptores de denuncia, siempre y cuando la mujer indígena víctima así lo estime, pero la Ley Especial no le da facultad jurisdiccional, por lo que lo que en materia de delitos de violencia de género la jurisdicción especial indígena está limitada por las disposiciones previstas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que está en consonancia con el artículo 9, numeral primero del Convenio OIT N.º 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, supra citados, según los cuales se podrá aplicar la usanza indígena tradicional para la resolución de conflictos o delitos, siempre que esta no transgreda o en modo alguno colide con el ordenamiento jurídico nacional u orden público..."

De este modo, se observa que de manera pacífica esta Sala Constitucional, cuando ha conocido conflictos de esta naturaleza sobre el dualismo del derecho entre indígena y no indígena, ha dejado claramente establecidas algunas reglas, que, sucintamente destacamos a continuación:

1. El derecho indígena es aquel que puede ser aplicado por las autoridades legítimas de estas comunidades en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afectan a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución, a la ley y al orden público.

2. Por ende, el derecho originario indígena se aplica: a) dentro del hábitat, b) con base en sus tradiciones ancestrales, y c) a los integrantes de su comunidad.

3. El alcance del derecho originario indígena se limita, en el caso de contrariar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley y el orden público.

4. La coordinación que debe existir entre la Jurisdicción Especial Indígena y el derecho estatal, debe atender al principio de legalidad, como lo señala literalmente el artículo 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que la coordinación de los distintos sistemas jurídicos es de reserva legal, ya que la ley es el único instrumento jurídico que desarrolla esa coordinación.

5. En los casos en los que existan niñas, niños y adolescentes no puede obviarse el interés superior de los mismos, en los términos previstos en la Convención de Derechos del Niño y en la legislación venezolana.

6. Cuando sean casos relacionados con violencia de género, en virtud de desarrollarse de conformidad con lo establecido con tratados fundamentales en materia de Derechos Humanos, deben ventilarse ante la jurisdicción especializada en esta rama y no ante la jurisdicción indígena.

Vistas las anteriores consideraciones, es necesario relacionarlas con el supuesto de hecho del caso de marras, que recordemos inicia en virtud de la denuncia que una maestra, identificada tan sólo como Carmen, formuló ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C), según la cual una alumna de la institución donde trabaja había sido víctima de un abuso sexual con penetración, delito previsto y sancionado en el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual fue presuntamente realizado por el ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO.

De este modo, corresponde a esta Sala conocer que ante una presunta vulneración de los derechos de una niña indígena, debe dilucidarse cómo este hecho constitutivo además de un delito, deberá juzgarse, de conformidad con los principios y normas del Derecho venezolano.

Al respecto, menester es recordar que en caso de niños, niñas y adolescentes todas las decisiones han de regirse por aquello que cumpla los extremos de ser su interés superior, en los términos que la Convención de Derechos del Niño y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes venezolana, lo han determinado. Sobre ello ha precisado esta Sala Constitucional un criterio, a través de la Sentencia N.º 1.917 del 14 de julio de 2003 (Caso: "José Fernando Coromoto Angulo y Rosalba María Salcedo de Angulo") en la cual se expresó que:

"... El interés superior del niño, en tanto concepto jurídico indeterminado, tiene por objetivo principal el que se proteja de forma integral al niño por su falta de madurez física y mental, pues requiere protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después de su nacimiento. A título ejemplificativo, el niño debe ser protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, tutores o familiares.

El concepto jurídico indeterminado 'interés superior' del niño se conecta con uno de los principios de carácter excepcional, junto al de cooperación de la colectividad hacia metas de integración, que tipifica el Derecho de Menores y le diferencian de las restantes ramas de la Ciencia del Derecho, cual es el principio eminentemente tutivo, en el que reside la esencia misma de su existir (MENDIZÁBAL OSES, L. Derecho de menores. Teoría general. Madrid. Ed. Pirámide. 1977 p. 49)

Por ello, el 'interés superior del niño' previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente viene a excluir y no a limitar la libertad individual de establecer y perseguir fines individuales, pues cuando se trata de la protección y cuidado de los niños se persiguen fines que van más allá de los personales. Así, el interés individual es sustituido por un interés superior, que es el del niño, porque a las necesidades de éste subviene la tutela jurídica con la cual se obtiene el fin superior de la comunidad social..."

De manera específica, el Comité de los Derechos del Niño (CRC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la Observación General N.º 11 (2009): "Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención [sobre los Derechos del Niño]", del 12 de Febrero de 2009, <https://www.refworld.org/es/docid/49f6bde02.html>, señaló que:

"30. La aplicación del principio del interés superior del niño requiere particular atención en el caso de los niños indígenas. El Comité señala que el interés superior del niño se concibe como un derecho colectivo y como un derecho individual, y que la aplicación de ese derecho a los niños indígenas como grupo exige que se examine la relación de ese derecho con los derechos culturales colectivos. Los niños indígenas no siempre han recibido la atención especial que merecen. En algunos casos, su particular situación ha quedado a la sombra de otros problemas de interés más general para los pueblos indígenas, como son el derecho a la tierra y la representación política. El interés superior del niño no puede desatenderse a vulnerarse en favor del interés superior del grupo". (Negritillas de este fallo).

Asimismo, en específico, el Derecho Internacional ha tomado conciencia que las niñas y mujeres indígenas se ven expuestas a diversas formas de abuso físico, psicológico y sexual, siendo que esto representa un obstáculo superior a su capacidad para ejercer sus derechos y participar plenamente en la sociedad, debiendo los Estados garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos sin violencia ni discriminación, lo cual es abordado y previsto en el artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General Organización de Naciones Unidas (ONU) el 13 de septiembre de 2007, que de manera expresa se refiere a:

"Artículo 22

1. En la aplicación de la presente Declaración se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas.

2. Los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación".

Siendo que esta Sala con la sentencia N.º 437, dictada el 28 de junio de 2018, en el presente caso, procedió a aclarar que el presente asunto no podía ser tratado como un conflicto de jurisdicción, determinado que sería ventilado como una acción innominada de naturaleza constitucional, cuyo objeto es proteger un derecho en un caso en el que, evidenciado el interés público, se constata que no posee ninguna legislación regulatoria al respecto y se encuentra desprovisto de un procedimiento judicial que permita su efectiva tutela. De este modo, tiene la Sala Constitucional la responsabilidad de determinar si en el presente caso se está en presencia de un ejercicio de justicia indígena, en los términos y con los fines previstos en la Constitución; así como ponderar los derechos constitucionales de la presunta víctima del presente caso.

Respecto a la jurisdicción indígena, como se señaló *ut supra*, en las nuevas Constituciones latinoamericanas, se ha reconocido el pluralismo jurídico, siendo uno de sus elementos centrales la constitucionalización de la jurisdicción indígena, entendida, en general, como la atribución de juzgar, con sujeción a sus normas y procedimientos propios, las conductas dañinas en materia penal y civil causadas por miembros de una comunidad contra otros miembros de la misma comunidad indígena.

En esencia, la jurisdicción indígena ha sido reconocida en América Latina siguiendo los criterios que para la misma se han fijado desde la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, entendiéndose fundamentalmente como la potestad que tienen los pueblos y naciones indígenas para administrar justicia dentro de sus territorios, a través de autoridades, normas y procedimientos propios.

Siendo con ello lo fundamental que se les da reconocimiento de: a) el poder, dominio que ejerce un pueblo indígena sobre su territorio, b) la potestad de los pueblos indígenas para recurrir a sus autoridades y dar solución a sus controversias y c) la facultad de tomar decisiones, juzgar y ejecutar hechos de acuerdo con sus normas jurídicas.

En Venezuela, con relación al grupo indígena que nos ocupa en el presente caso, así como el territorio que ocupa, encontramos que se refiere a la comunidad "Huottója Ahuyáru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jucipocattó Tãbotó Roechuome Ahuyáru Tuhuo'cho Reje", se precisa que pertenece a la etnia de Los Piaroa o Huottója (como ellos se autodenominan), o también Dearuwa, que significa "dueños de la selva", ellos constituyen uno de los grupos étnicos más importantes de la Región Guayana de Venezuela, sus comunidades se ubican principalmente en las zonas boscosas y accidentadas del norte del Estado Amazonas, así como en la amplia cuenca del río Sipapo y sus afluentes los ríos Cíao y Autana.

Respecto a los Piaros en el portal de Wikipedia <https://es.wikipedia.org/wiki/Piaros> encontramos información sobre sus características como grupo étnico, destacando que:

"Los piaros o huottója son un pueblo indígena que vive en las orillas del río Orinoco y sus ríos tributarios en la actual Venezuela y en algunas zonas de Colombia. Se estima que la población supera las 20 mil personas. Otros nombres para este pueblo son wotíeh, choitula, wóitula o dearwa.

La cultura material y económica de los Piaroa es típica de la región guayanesa-amazónica. Su subsistencia está basada en el cultivo de yuca, la cacería, la pesca y la recolección de vegetales silvestres y micro fauna tal como arañas, orugas, lombrices, bacahacos, termitas, y larvas. Además de las actividades directamente dirigidas a la obtención de alimentos, un aspecto integral de su economía de subsistencia es la manufactura de varios artefactos tecnológicos: cestas, alfarería, madereras, pinuras, venenos, tejidos, mecates, antorchas, plumaje, collares, ceras, gomitas, máscaras, cerbatanas, tela de corteza y totumas. Los Piaroa ahastecen de bienes agrícolas a las poblaciones criollas, suministrando una buena proporción de los frutos y subproductos de la yuca consumidos en Puerto Ayacucho.

La cultura actual de los Piaroa es producto del mestizaje de los sobrevivientes de otros grupos indígenas que habitaban su actual territorio y que por un efecto de gravitación demográfica se concentraron y mezclaron con los grupos montañeses de Piaroa, quienes habían logrado resistir mejor los efectos despobladores de la colonización, gracias a su dispersión y al difícil acceso de sus territorios. Por ello, uno de los perfiles más resultantes de su conformación sociocultural es la mezcla de rasgos, que en algún momento debieron pertenecer a grupos desaparecidos de su actual territorio como los mairipuri, los avani, los sereu, los mabu, lo quiruba y los atures, entre otros.

Otros Piaros que han migrado río abajo son más transculturizados, estos viven en comunidades nucleadas y sedentarias, han adoptado vestimentas no tradicionales, están integrados a los mercados regionales, tienen contactos frecuentes con los pueblos criollos y han adoptado religiones occidentales.

Un hecho que resalta de los Piaros es su negación absoluta al ejercicio de la violencia física o verbal. Severos en su autocontrol (cuando no median factores perturbadores como el alcohol), rigurosos y disciplinados, se horrorizan de aquel que no es capaz de domesticar sus emociones. Por ello, frente a las desatenciones tienden a huir temerosos del peligro representado por el descontrol. El homicidio es desconocido debido a la creencia de que quien lo comete muere inmediatamente en horribles condiciones.

Los Piaros también son notables por lo igualitario de sus sociedades, que algunos científicos describen como anarquistas. Estos ponen un gran valor en la autonomía y libertad individuales y son conscientes de la importancia de asegurar que nadie esté bajo los órdenes de alguien más. Para eso también se preocupan de que nadie tome control sobre recursos socioeconómicos que permitan limitar la libertad de otros. La jerarquía de los piaros es modesta y a pesar de que los líderes comunales siempre son hombres, algunos expertos llegan incluso a dudar del dominio masculino sobre los habitantes."

También encontramos información sobre Los Piaroa, expresada por el Antropólogo Alexander Mansutti, a través del portal del Gobierno en Línea http://www.gobiernoonline.ve/venezuela/perfil_historia6_f.html, en el cual se destaca información sobre dicho grupo étnico de la siguiente manera:

"Los Piaroa son un pueblo indígena de filiación lingüística sáiva, cuyas comunidades se encuentran dispersas en un territorio comprendido entre Punta Piaroa en el Alto Orinoco y Los Pijiguas en la cuenca del río Suapure.

Después de 300 años de contacto con Occidente, los Piaroa muestran en su cuerpo social las trazas de su rigor. Ellos son la expresión del mestizaje de los sobrevivientes de los grupos indígenas que habitaban su actual territorio y que por un efecto de gravitación demográfica se concentraron y mezclaron con los grupos montañeses de Piaroa, quienes habían logrado resistir mejor los efectos despoblado res de la colonización gracias a su dispersión demográfica y al difícil acceso de sus territorios. Por ello, uno de los perfiles más resaltantes de su conformación sociocultural es la mezcla de rasgos, que en algún momento debieron pertenecer al haber de otros grupos habitantes ya desaparecidos de su actual territorio como los maipuri, los avani, los sereu, los mabu, lo quiruba y los atures, por citar sólo los más importantes. En resumen, los Piaroa son herederos de un patrimonio cultural que es el suyo y al mismo tiempo, el de todos los grupos vecinos destruidos por la colonización.

Hasta hace alrededor de unos treinta años utilizaban casi todos los elementos tradicionales de su cultura material: hermosos guayucos blancos de algodón finamente adornados, casas comunitarias de forma cónica elíptica cuyos techos de palma llegaban hasta el suelo, cerbatanas cuyas flechas eran humedecidas con el mejor curaré del Amazonas venezolano, pinturas vegetales, embarcaciones monóxilas y canaletes.

Hoy han cambiado mucho su cotidianidad. La gran mayoría se viste y adorna como lo hacemos sus vecinos criollos. La gran churuta tradicional es usada sólo en unas pocas comunidades, mientras el asentamiento concentrado de varias casas familiares toma su lugar y se hace característico. Las cerbatanas y el curaré son cada día más escasos, mientras la bécula es un instrumento obligado en el instrumental doméstico.

Finalmente, el hecho cultural más resalta de los piarocas es su negación absoluta al ejercicio de la violencia física o verbal. Severos en su auto control (cuando no mudian factores perturbadores como el alcohol), rigurosos y disciplinados, se horrorizan de aquel que no es capaz de domesticar sus emociones. Por ello, frente a las destemplanzas tienden a huir temerosos del peligro representado por el descontrol.

En resumen, los Piaroa actuales son no sólo los herederos de ricas tradiciones sino también modelo de comportamiento frente a la violencia y activos gestores del Amazonas venezolano del futuro".

Según el Portal <https://etniasdelmundo.com>, al referirse a Los Piaroas, establecen que:

"Los indios Piaroa son una tribu india indígena que vive en la selva amazónica cerca del río Orinoco en Venezuela, se los (sic) considera una de las sociedades más pacíficas del mundo, con muy poca violencia en las comunidades.

En una de sus ceremonias más importantes, la Ceremonia de Limpieza, usan máscaras y disfraces y ocultan por completo sus identidades. Se turnan para anunciar hechos que han cometido durante todo el año, ya sean buenos o malos, y se les perdona o se les despide.

Esta sociedad pacífica y casi idílica rara vez ve actos de violencia y continúa en paz, independientemente del caos que los rodea. Prefieren trabajar juntos y se les enseña a abrazar el éxito grupal en lugar de las misiones que los enviarán al camino de la auto gratitud. A través de esto, son capaces de vivir cohesionadamente y trabajar juntos como un grupo en lugar de luchar el uno contra el otro en competencia.

De hecho, los Piaroa creen que cualquier hombre que mata a otro hombre morirá de una muerte terrible (incluidos los forasteros), haciendo que el asesinato sea desconocido e inexistente para ellos. Al eliminar la propiedad y el control sobre el trabajo de otros en lugar de la ley civil y el castigo, los Piaroa han mantenido la paz.

En relación a sus mecanismos de justicia y castigo, se observa que los piarocas suelen reprimir con el silencio y tienen una profunda convicción que las enfermedades y las desgracias son castigos sagrados infligidos por sus Dioses".

Con todas las referencias señaladas, podemos observar, sin lugar a cualquier duda, que la Comunidad "Huottója Ahuiyáru Tuhuo'cho Reje" es una de las integrantes de los pueblos indígenas venezolanos a los cuales les han sido reconocidos derechos constitucionales propios, entre ellos la posibilidad de administrar justicia, en los términos definidos por los instrumentos que rigen la materia. Ahora bien, es importante considerar que el sentido de esta atribución es que otorgarles la facultad de conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, así como servir para promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales, incluyendo sus costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con los lineamientos del ordenamiento jurídico venezolano, del cual forman parte.

Así, este derecho de administrar justicia no se plantea de ninguna manera como ilimitado o capaz de servir como un mecanismo que permita abstraer materias de la jurisdicción penal ordinaria o especial, sino que para ser empleado de manera legítima ha de cumplir los extremos precisados, por lo cual se hace necesario recordar que este reconocimiento no debe entenderse como la facultad de crear nuevas jurisdicciones paralelas al sistema de justicia venezolano, sino como la posibilidad de juzgar, de manera tradicional, con las autoridades legítimas y de las formas usuales que tienen las autoridades originarias sobre los miembros de sus pueblos indígenas.

Tenemos entonces que en el presente caso, ha de observarse que en el juzgamiento del ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, ha ocurrido lo siguiente:

a) La detención preventiva y la acusación formulada por la Fiscalía Quinta del Ministerio Público del Estado Amazonas contra el ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual a Niña con penetración, agravado y continuado, según lo previsto en el artículo 259 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente con la agravante establecida en el artículo 217 ejusdem, en perjuicio de la niña (identidad omitida), caso que estaba en etapa de juicio por ante el Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial, Penal del Estado Amazonas, que decidió remitir esa causa al Tribunal Supremo de Justicia, por el planteamiento de un conflicto de competencia con la jurisdicción indígena.

b) La acción de amparo constitucional intentada ante esta Sala por un grupo de ciudadanos que se auto denominan Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad "Huottója Ahuiyáru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jueipocattó Täbotó Roechuome Ahuiyáru Tuhuo'cho Reje", en el que se solicitó se aplique el derecho indígena en preferencia al derecho nacional, pues se tiene como no existente en su cultura el delito de abuso sexual contra niñas y adolescentes.

c) El juzgamiento mediante un procedimiento afín al ordinario y sustentado su desarrollo en el Código Orgánico Procesal Penal, realizado por este grupo de ciudadanos que se auto denominan Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad "Huottója Ahuiyáru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jueipocattó Täbotó Roechuome Ahuiyáru Tuhuo'cho Reje", el 1 de mayo de 2017, en el que absuelven al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO y le exigen al Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas que se abstenga de seguir conociendo el caso, así como que apliquen su decisión.

En aras de un mayor ahondamiento, esta Sala Constitucional procede a considerar, desde varios enfoques, la resolución de la presente *Acción Innomiada de Naturaleza Constitucional*, y a tal efecto analizamos:

a) Naturaleza, fines y alcance de la jurisdicción indígena

Los sistemas de justicia indígena y su especial jurisdicción deben tratar de garantizar y defender los derechos humanos internacionalmente reconocidos y la ley, en el sentido más amplio posible; de allí que su naturaleza es garantista de derechos ya reconocidos en el ámbito internacional, estas compromisos son particularmente importantes en relación con los procedimientos que constituyen una analogía a la sentencia y sanción penal, o aquellos que afecten de otra manera los intereses fundamentales de las partes.

En lo que respecta a los procedimientos de la jurisdicción indígena, que tienen un carácter esencialmente penal y pueden imponer sanciones, la justicia indígena tiene la responsabilidad de defender los derechos humanos, incluidas, por ejemplo, las garantías de imparcialidad y equidad, lo cual es especialmente importante.

Tal como lo señala el autor mexicano Mario Cruz Martínez, en su obra "El Sistema Judicial Mexicano y el Derecho Indígena en México", inserta dentro de la Revista Jurídica N.º 41, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, publicada por el Instituto de la Judicatura Federal adscrito al Consejo de la Judicatura Federal. Ciudad de México, 2011, Página 85: "... la «justicia tradicional indígena» es un asunto de nuevo cuño en la doctrina jurídica contemporánea. Uno que nace de la contribución de diversas ciencias sociales (como la antropología, la etnología y la sociología) que viene a hacer del Estado latinoamericano actual una construcción social, de derechos humanos más incluyente y perfeccionada que aquellas que ignoraron la existencia de pueblos enteros, permitiendo diversas formas de discriminación y explotación..."

Ha sido establecido por el derecho y la doctrina en esta materia que uno de los principios que han sido discutidos en la jurisprudencia en materia indígena es el de la igualdad y su aplicación en el ejercicio de los derechos colectivos indígenas, ello porque si bien la igualdad material está reconocida en el texto constitucional, sin embargo la existencia real de principios de aseguramiento del derecho a un mínimo vital se cuestionan en el derecho indígena.

Al respecto el autor mexicano Mario Cruz Martínez, en su obra "Composición pluricultural de la Nación. Artículo Segundo Constitucional", publicada dentro de la Revista Derechos Humanos en la Constitución: Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fundación Konrad Adenauer. México, 2013, Página 170, reveló:

"...El debate que ha precedido a las diferentes regulaciones jurídicas ha mostrado la complejidad del asunto. El derecho indígena no es un tema de moda, es uno de los grandes temas de la agenda del siglo XXI de los pueblos latinoamericanos. Sin embargo, la legislación es únicamente un modelo al cual nos podemos referir de manera primaria, pero quedan muchas cosas en el tintero. La auténtica defensa de los derechos indígenas y su cumplimiento cabal por los diferentes órganos jurisdiccionales.

La gran enseñanza es la siguiente, no podemos olvidar a nuestros indígenas porque olvidamos una parte de nuestra identidad. El nuevo siglo es de los ciudadanos de dos mundos: aquellos que miran y valoran los misterios de su cultura y que enfrentan las oleadas del mundo globalizado. Muchos no se han percatado que es necesario pertenecer a dos mundos. En este momento todos somos ciudadanos de dos mundos; un mundo es el local, donde convergen todas las manifestaciones sociales y culturales. Este mundo es incluyente. El otro mundo es el que nos permite conocer y comprender los valores de nuestros pueblos.

El alcance de la jurisdicción de los sistemas de justicia indígenas y otros de justicia tradicional o consuetudinaria varía en todo el mundo. Algunos sistemas de justicia de este tipo tienen jurisdicción exclusiva sobre todos los asuntos que ocurren dentro de su territorio tradicional, mientras que otros solo tienen jurisdicción sobre los miembros de la comunidad indígena, tradicional o consuetudinaria..." (Negritas del presente fálio).

La jurista mexicana María Teresa Sierra en su artículo "Derecho Indígena y Acceso a la Justicia en México: Perspectivas desde la interlegalidad" publicado dentro de la Revista del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos IIDH N.º 41, Edición Especial sobre Derechos Indígenas. (Período enero - junio del 2005) San José, Costa Rica. Páginas 311 y 312 señaló sobre la relación entre el derecho indígena y el no indígena que: "... En suma, la nueva legislación multicultural si bien contribuye a empoderar a los pueblos indígenas también puede ser un dispositivo en la tecnología del poder y la domesticación. ... no hay nada inherentemente progresista o emancipador en el pluralismo legal, tampoco

implica igualdad; no se trata de desconocer los avances en las políticas de reconocimiento sino de advertir las posibles trampas de la institucionalidad indígena si estas no apuntan también a transformar los sistemas de la desigualdad social. Una interpretación desde la interlegalidad interesada en dar cuenta de las prácticas jurídicas debe entonces apostar a construir visiones no cerradas de los sistemas jurídicos indígenas y del Estado, a pensar en sus necesarias conexiones contemplando también las relaciones de poder en las que se insertan. De esta manera, pensar la interlegalidad implica apostar a construir diálogos interculturales en donde los sistemas jurídicos puedan enriquecerse mutuamente y transformarse, para permitir cambios en los órdenes sociales en su conjunto y el que las sociedades indígenas tengan la posibilidad de definir los límites y alcances de sus jurisdicciones; lo que también significa considerar sus vínculos con la sociedad nacional y la necesidad de garantizar salidas a las propias controversias internas y a las voces minorizadas...". (Negritas del presente fallo).

En la obra "Justicia y Diversidad en América Latina. Pueblos indígenas ante la Globalización", presentada por los Coordinadores: Victoria Chenaut, Magdalena Gómez, Héctor Ortiz y María Teresa Sierra, publicada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (Flacso México y Ecuador), 2011, página 24, expresaron que:

"... Los debates sobre los pueblos indígenas han incidido también en la construcción de los nuevos paradigmas del multiculturalismo, los derechos humanos y las ciudadanías en las sociedades contemporáneas, confrontando las tradiciones jurídicas hegemónicas para pensar el derecho y la cultura. Las reivindicaciones indígenas han servido de ejemplo al propiciar la reconfiguración étnica de otros colectivos étnoculturales, igualmente excluidos, como es el caso de las poblaciones afrodescendientes o los pueblos también conocidos como gitanos que demandan a su vez el reconocimiento de sus derechos culturales y políticos ante un Estado que se los ha negado.

En la actualidad, los estudios sobre pluralismo jurídico, los derechos humanos y los derechos indígenas, así como el análisis de los cambios legales que abren el reconocimiento de los derechos colectivos, han nucleado en gran medida los análisis de la antropología jurídica latinoamericana y de la corriente crítica del derecho. Si bien, han sido enriquecidos por nuevas perspectivas marcadas por los problemas contemporáneos de nuestras sociedades, como sucede respecto de la globalización y la crítica al multiculturalismo. En particular hay dos componentes medulares de los debates en la antropología y sociología jurídica contemporáneas de América Latina que sirven como ejes analíticos del libro que presentamos: la globalización del derecho y la problemática de la justicia...". (Negritas del presente fallo).

Nuestro autor patrio Ricardo Colmenares Olivares en su Artículo "El derecho consuetudinario indígena en Venezuela: Balance y Perspectivas", publicado dentro de la Revista del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos IIDH N.º 41, Edición Especial sobre Derechos Indígenas, (Periodo enero - junio del 2005) San José, Costa Rica. Página 83, refirió que: "... Este paralelismo de sistemas es lo que se ha dado por llamar "pluralismo jurídico", conocido también como "pluralismo legal", que no es más que una categoría sociológica, y que nace en tanto coexistan dos o más sistemas normativos dentro de un mismo espacio social. Esto implica que deberá dársele cabida a las instituciones y sistemas jurídicos propios de los pueblos indígenas para solventar los conflictos...".

Tenemos entonces que, los rasgos centrales de este reconocimiento constitucional, consideran que a los pueblos originarios deben serle garantizados los derechos a:

- 1) El reconocimiento de usos y costumbres indígenas;
- 2) La auto adscripción;
- 3) La libre determinación;
- 4) La autonomía;
- 5) La preservación de la identidad cultural;
- 6) La tierra y al territorio;
- 7) La consulta y participación;
- 8) Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado;
- 9) El desarrollo.

b) El juez natural dentro de la jurisdicción indígena

Sobre este aspecto del juez natural dentro de la especial jurisdicción indígena, el autor Ricardo Colmenares Olivares en su Artículo "El derecho consuetudinario indígena en Venezuela: Balance y Perspectivas", publicado dentro de la Revista del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos IIDH N.º 41, Edición Especial sobre Derechos Indígenas, (Periodo enero - junio del 2005) San José, Costa Rica. Páginas 84 y 94 reveló que:

"... El reconocimiento expreso del derecho y la jurisdicción indígenas amplía y enriquece la noción de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia establecido en el artículo 2 del texto fundamental venezolano, pues ello implica además la participación de nuevos actores sociales (los indígenas) dentro del sistema de administración de justicia, quienes aplicarán formas propias de resolución de conflictos, de acuerdo a su cosmovisión y patrones culturales.

Así la justicia, como valor superior del ordenamiento jurídico, alcanza su verdadera dimensión para cada indígena, pues la retribución concreta que espera del derecho (para nosotros equidad o justicia concreta) responderá de acuerdo a sus patrones culturales y no conforme a un derecho ajeno o derecho de "terceros".

Por otro lado, esta norma constitucional permite hablar propiamente de un Estado pluricultural, es decir, se reconoce de manera oficial a una sociedad que no es homogénea y que permite la coexistencia de dos o más sistemas normativos. Todo ello va a permitir que las normas estatales y las no formales "... convivan en armonía las formas de intersubjetividad y control social propias de humanos históricamente diferenciados del conglomerado estatal, como lo son por autonomía las poblaciones indígenas...". (Negritas del presente fallo).

También sobre el tema del juez natural, el autor Ricardo Colmenares Olivares en su artículo "El caso del niño Warao. Comentarios a la sentencia del 03 de febrero de 2012",

publicado en la Revista Frónesis, Vol. 21, N.º 2, de Filosofía Jurídica, Social y Política. Sección de Antropología Jurídica. Instituto de Filosofía del Derecho Dr. J.M. Delgado Ocando. Universidad del Zulia. Páginas 373 y 374, refirió que: "... En el emblemático caso del niño Warao... del Estado Delta Amacuro, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 3 de febrero de 2012, ... anuló tanto la decisión dictada en fecha 23 de noviembre de 2009 por los caciques de varias comunidades en la que condenaron al referido niño a veinte (20) años de prisión, como la subsiguiente decisión pronunciada en fecha 02 de diciembre de 2009 por el Tribunal Segundo de Control de la Sección Penal de Adolescentes del Estado Delta Amacuro) al conocer por vía de amparo del caso en cuestión, alegando que el accionante no fue juzgado por su autoridad legítima (el Aidamo) ni de acuerdo a las costumbres punitivas propias de su pueblo, sino por unos caciques que no tenían legitimidad para dictar tal condena, violando así el debido proceso. No obstante, en dicho caso la misma Sala dejó sentado sin ningún tipo de ambigüedad, un criterio de fondo en torno a la competencia material para conocer de todo tipo de asunto, aun cuando sea un hecho grave como lo es el darle muerte a otra persona (homicidio), siempre que el conflicto no sea de las materias expresamente prohibidas por el legislador...". (Negritas del presente fallo).

Tenemos que esta Sala con la sentencia N.º 2 del 3 de febrero de 2012 (Caso Niño Warao) por primera vez se ha detenido fundamentalmente a valorar esta materia de justicia indígena dentro de su jurisdicción indígena, en ella, se delimitó la jurisdicción indígena cuando anuló tanto la decisión dictada el 23 de noviembre de 2009 por los caciques de varias comunidades en la que condenaron a un niño a veinte (20) años de prisión, como la subsiguiente decisión pronunciada el 2 de diciembre de 2009 por el Tribunal Segundo en funciones de Control de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes del Estado Delta Amacuro, que conoció por vía de amparo del caso en cuestión, alegando que el accionante no fue juzgado por su autoridad legítima (el Aidamo), ni de acuerdo con las costumbres punitivas propias de su pueblo, sino por unos caciques que no tenían legitimidad para dictar tal condena, violando así el debido proceso.

Así, uno de los puntos centrales de la sentencia es declarar que, ante la jurisdicción indígena, así como en los tribunales de la República, toda persona tiene el derecho humano de ser juzgado por un juez natural, en tanto la Sala lo ha considerado como un derecho humano fundamental y universal, y por tanto de orden público. Para afirmarlo, sustentó la Sala su razonamiento en el artículo 132 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, destacándose que esta potestad debe ser ejercida por los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus autoridades legítimas, de tomar decisiones de acuerdo con su derecho propio y conforme con los procedimientos tradicionales, para solucionar de forma autónoma y definitiva las controversias que se susciten entre sus integrantes, dentro de su hábitat y tierras.

Se ha entendido que todos los problemas y demás conflictos que se susciten dentro del espacio territorial en el cual habitan los indígenas constituyen hechos y situaciones reales concretas, que deberán ser resueltos dentro de un marco procedimental establecido según las costumbres de cada pueblo o comunidad, la cual podríamos llamar "relación procesal".

Así, desde el punto de vista jurídico, las autoridades indígenas tienen la plena facultad de aplicar el derecho consuetudinario dentro de un espacio territorial (competencia): es decir, tienen la capacidad de administrar justicia.

En este orden de ideas, el artículo 133 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, establece la competencia de la jurisdicción especial indígena y es del siguiente tenor:

"Artículo 133. La competencia de la jurisdicción especial indígena estará determinada por los siguientes criterios:

1. Competencia Territorial: Las autoridades legítimas tendrán competencia para conocer de cualquier incidencia o conflicto surgido dentro del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas respectivos.

2. Competencia Extraterritorial: Las autoridades legítimas tendrán competencia extraterritorial respecto de controversias sometidas a su conocimiento, surgidas fuera del hábitat y tierras indígenas, cuando las mismas sean entre integrantes de pueblos y comunidades indígenas, no revistan carácter penal y no afecten derechos de terceros no indígenas. En este caso, la autoridad legítima decidirá según las normas, usos y costumbres del pueblo o comunidad indígena y lo dispuesto en el presente artículo, si conoce o no de la controversia y, en caso negativo, informará a los solicitantes y remitirá el caso a la jurisdicción ordinaria cuando corresponda.

3. Competencia Material: Las autoridades legítimas tendrán competencia para conocer y decidir sobre cualquier conflicto o solicitud, independientemente de la materia de que se trate. Se exceptúan de esta competencia material, los delitos contra la seguridad e integridad de la Nación, delitos de corrupción o contra el patrimonio público, ilícitos aduaneros, tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes y tráfico ilícito de armas de fuego, delitos cometidos con el concierto o concurrencia de manera organizada de varias personas y los crímenes internacionales: el genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.

4. Competencia Personal: La jurisdicción especial indígena tendrá competencia para conocer de solicitudes o conflictos que involucren a cualquier integrante del pueblo o comunidad indígena. Las personas que no siendo integrantes de la comunidad pero que encontrándose dentro del hábitat y tierras indígenas cometan algún delito previsto en la legislación ordinaria, podrán ser detenidas preventivamente por las autoridades legítimas, las cuales deberán poner al detenido a la orden de la jurisdicción ordinaria conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal.

En principio, el derecho consuetudinario indígena sólo sería aplicable a las personas indígenas que se encuentren en el respectivo hábitat delimitado, y a la luz del artículo 260 constitucional, las autoridades legítimas de los pueblos y comunidades indígenas pueden aplicar el derecho consuetudinario a todos los "integrantes" que se encuentren dentro del hábitat, una vez que éstos hayan sido demarcados por ley especial.

c) La protección de las niñas, adolescentes y mujeres indígenas

En materia de Derechos Humanos, existen instrumentos jurídicos internacionales que sirven de piedra angular para todo el régimen que deben desarrollar los Estados, dos de estos instrumentos nucleares son:

1.- La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la cual está considerada como el documento jurídico internacional más importante en la historia de la lucha sobre todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, brinda la misma protección a todas las mujeres, sin distinción de su identidad cultural, se dispuso de manera expresa, en el artículo 5 la obligación de los Estados Partes de tomar todas las medidas apropiadas para: "... *modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres...*".

2.- La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), que recoge los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños, niñas y adolescentes. Su aplicación es obligada para los gobiernos que la han ratificado, pero también define las obligaciones y responsabilidades de otros agentes como los padres, profesores, profesionales de la salud, jueces, investigadores y los propios niños, niñas y adolescentes.

En la Observación General N.º 11. "Sobre los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención" del 12 de febrero de 2009, el Comité de los Derechos del Niño, 50º Período de Sesiones CRC/C/GC/11, disponible en <https://undocs.org/es/CRC/C/GC/11> en los párrafos 75 y 76 determinó que:

"... Se recuerda a los Estados partes que, de conformidad con el artículo 12 de la Convención, todos los niños deberán tener la oportunidad de ser escuchados, ya directamente, ya por medio de un representante, en todo procedimiento judicial o penal que los afecte. En el caso de los niños indígenas, los Estados partes deberían adoptar medidas para proporcionar los servicios de un intérprete sin cargo alguno, de ser necesario, y para garantizar al niño asistencia letrada de forma que se tenga en cuenta su contexto cultural.

Se alienta a los Estados partes a tomar todas las medidas procedentes para ayudar a los pueblos indígenas a organizar y poner en práctica sistemas tradicionales de justicia restaurativa, siempre que esos programas sean conformes a los derechos enunciados en la Convención, en particular el interés superior del niño.

El Comité señala a la atención de los Estados partes las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, en las que se alienta a establecer programas comunitarios para prevenir esa delincuencia.

Los Estados partes, en consulta con los pueblos indígenas, deberían tratar de apoyar el establecimiento de políticas, programas y servicios comunitarios que tengan en cuenta las necesidades y la cultura de los niños indígenas, de sus familias y de sus comunidades. Los Estados deberían proporcionar recursos suficientes a los sistemas de justicia juvenil, en particular los establecidos y aplicados por pueblos indígenas..." (Negritas del presente fallo).

En la Observación General N.º 12. "El derecho del niño a ser escuchado" del 20 de julio de 2009, el Comité de los Derechos del Niño, 51º Período de Sesiones, CRC/C/GC/12, disponible en <https://undocs.org/es/CRC/C/GC/12> en las páginas 7, 15, 18 y 22 estableció en relación al análisis del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño que:

"... Los derechos de los niños y niñas deben protegerse en todos los sistemas judiciales, incluidos los sistemas de justicia indígenas y otros tradicionales o consuetudinarios. En las cuestiones relativas a los niños y niñas, los jueces, los responsables de tomar decisiones y otras autoridades relevantes en todos los tipos de sistemas de justicia, deben velar por que el interés superior del niño sea una consideración primordial.

El artículo 12 pone de manifiesto que el niño tiene derechos que ejercen influencia en su vida, que no son únicamente los derechos derivados de su vulnerabilidad (protección) o su dependencia respecto de los adultos (provisión). La Convención reconoce al niño como sujeto de derechos, y la ratificación casi universal de este instrumento internacional por los Estados partes pone de relieve esta condición del niño, que está expresada claramente en el artículo 12.

El Comité siempre ha interpretado la participación de manera amplia para establecer procedimientos no solo para niños considerados individualmente y grupos de niños claramente definidos, sino también para grupos de niños, como los niños indígenas, los niños con discapacidades o los niños en general, que resultan afectados directa o indirectamente por las condiciones sociales, económicas o culturales de la vida en su sociedad.

El Comité de los Derechos del Niño ha identificado el artículo 12 como uno de los cuatro principios generales de la Convención, siendo los otros el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida y al desarrollo, y la consideración primordial del interés superior del niño, lo que pone de relieve que este artículo, no solo establece un derecho en sí mismo, sino que también debe considerarse en la interpretación y aplicación de todos los demás derechos.

También ha subrayado que el artículo 12 se aplica a los procedimientos judiciales y administrativos de todo tipo, incluidos los mecanismos alternativos de resolución de conflictos asociados, como la mediación y el arbitraje. El Comité se ha referido específicamente a los derechos de participación de los niños indígenas y ha recomendado que los Estados proporcionen formación sobre el artículo 12 y su aplicación en la práctica a todos los profesionales que trabajan para y por lo niños, incluyendo, entre otros, a abogados, jueces y líderes tradicionales..." (Negritas del presente fallo).

En la Recomendación General N.º 33 "Sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia" del 3 de agosto de 2015, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, dentro del marco de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), disponible en: <https://undocs.org/es/CEDAW/C/GC/33> en las páginas 16, 17, 25, 29, entre otros, ha establecido una serie de medidas que los Estados deben adoptar para garantizar: "... la disponibilidad general y la accesibilidad de los sistemas de justicia para las mujeres, y

para eliminar las leyes, procedimientos y prácticas discriminatorias, así como los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema de justicia. Por lo que respecta a los sistemas de justicia plurales, incluidos los sistemas de justicia indígenas y otros..." (Negritas del presente fallo). Así como entre otros aspectos relevantes refirió que:

"... Las mujeres tienen que poder confiar en un sistema judicial libre de mitos y estereotipos y en una judicatura cuya imparcialidad no se vea comprometida por esos supuestos sesgados. La eliminación de los estereotipos judiciales en los sistemas de justicia es una medida esencial para asegurar la igualdad y la justicia para las víctimas y los supervivientes.

El derecho penal es particularmente importante para garantizar que la mujer puede ejercer sus derechos humanos, incluido su derecho de acceso a la justicia, sobre la base de la igualdad. Los Estados partes están obligados, en virtud de los artículos 2 y 15 de la Convención, a asegurar que las mujeres cuenten con la protección y los recursos ofrecidos por el derecho penal y que no estén expuestas a discriminación en el contexto de esos mecanismos, ya sea como víctimas o perpetradoras de actos delictivos.

Incluyen la promulgación de legislación que defina claramente la relación entre los sistemas extrajudiciales de justicia existentes, la creación de mecanismos estatales de revisión y el reconocimiento y la codificación oficiales de los sistemas religiosos, consuetudinarios, indígenas, comunitarios y de otro tipo.

Los derechos de la mujer deben considerarse y protegerse por igual en todos los tipos de sistemas judiciales, incluyendo los sistemas de justicia indígenas o tradicionales y consuetudinarios, y los jueces, las personas encargadas de adoptar las decisiones y otras autoridades pertinentes, deben aplicar las intervenciones apropiadas para garantizar la igualdad de la mujer..." (Negritas del presente fallo).

Así tenemos que al afrontarse el derecho con una situación que, pese a tener un asiento cultural de larga data constituye una violación del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, a la protección de la sexualidad como un derecho humano, que debe darse de manera consentida, segura y libre, ha de reconocer que no puede imponerse un uso, tradición o costumbre sobre las normas que le garantizan a toda mujer su ejercicio, como ocurre en los casos de violación o de abuso sexual a niñas, adolescentes de género femenino y mujeres, así tengan estas la condición de indígenas.

Por el contrario, es importante considerar que cuando una instancia de justicia le corresponda conocer un caso que involucre a una niña, una adolescente o mujer indígena debe tener en cuenta la existencia de la discriminación interseccional que ocurre cuando se da una diferencia irracional, subjetiva y desproporcionada de trato basada en dos o más causales de discriminación las cuales concurren conjuntamente; por ello, cuando se está en presencia de un caso que se relaciona con una persona determinada como vulnerable por su género, sexo, pertenencia étnica, condición social u otra causal, debe tomarse en cuenta que estas sufren de especiales dificultades para ejercitar con plenitud los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico y por ello, las garantías deben reforzarse, así como han de las situaciones particulares de la víctima, tales como su género, su cultura, su lengua. Entonces, las situaciones particulares de la víctima, tales como su género, su cultura, su lengua y su edad, han de considerarse al momento de juzgar, para evitar su revictimización.

d) La violencia sexual en los pueblos indígenas

Determinado como ha sido que, todas las personas en el territorio nacional, son titulares de los mismos derechos con las únicas excepciones previstas en la Constitución, así, como tomando en cuenta que la existencia de catálogos especiales dentro del sistema de Derechos Humanos ha de interpretarse siempre en adición, para el mejoramiento de la situación jurídica y política de las personas beneficiados por estos, es preciso tomar en cuenta que la violencia sexual es un flagelo que el Estado venezolano, de manera consona con sus obligaciones internacionales, se ha propuesto erradicar para garantizarle a toda niña, adolescente o mujer una vida libre de violencia.

Las niñas, las adolescentes y las mujeres indígenas, son, en consecuencia, titulares de los mismos derechos sexuales y reproductivos que todas sus congéneres, sin que pueda invocarse ninguna costumbre de un pueblo originario para relativizarlo, por el contrario, su protección supone tanto para Venezuela un reto adicional e ineludible, ya que en determinadas circunstancias, cuando un sistema de justicia indígena u otro tradicional o consuetudinario funciona de manera incompatible con las normas internacionales de derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos puede permitir o incluso exigir la intervención de las instituciones estatales.

Al respecto podemos reseñar lo establecido en el libro "Justicia y Diversidad en América Latina. Pueblos indígenas ante la Globalización", presentada por los Coordinadores: Victoria Chenaut, Magdalena Gómez, Héctor Ortiz y María Teresa Sierra, publicada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (Flacso México y Ecuador), 2011, página 26; expresaron que: "... la relación entre género y derecho se inserta en dinámicas históricas y de poder, que se producen en la intersección con la pertenencia étnica, la clase social, la edad, las prácticas y los valores culturales, entre otros factores. También en estos textos aparece la doble dimensión del derecho: por un lado, la que concierne a la regulación y formas de dominación y, por otro, el hecho de que en ciertos casos el Estado y el derecho estatal han sido relevantes para la resistencia de los movimientos sociales y de las mujeres que denuncian casos de agresión sexual..." (Negritas del presente fallo).

e) La calificación de los delitos sexuales como crímenes atroces realizada por esta Sala Constitucional

Esta Sala Constitucional, con la Sentencia N.º 91 del 15 de marzo de 2017 (Caso: "Alfonso Nicolás De Conno Alaya"), determinó con carácter vinculante, cuales delitos tipificados y sancionados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no tendrían beneficios procesales, ni se les aplicaría fórmulas alternativas a la ejecución de la pena, ya que los delitos sexuales cometidos contra niñas,

adolescentes y mujeres debe ser incorporado al catálogo de hechos punibles constitutivos de graves violaciones contra los derechos humanos, ya que constituyen delitos atroces, configuran una violación sistemática de los derechos humanos, que muestran en forma dramática los efectos de la discriminación y subordinación de la mujer por razones de sexo en la sociedad, quedando establecido desde entonces que:

"Sentencia de la Sala Constitucional que establece, con carácter vinculante;

a- que, en el juzgamiento de los siguientes delitos previstos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, cuales son:

- 1) violencia sexual, tipificado en el artículo 43, y cometido en forma continuada;*
- 2) acto carnal con víctima especialmente vulnerable (artículo 44 LOSDMVLV);*
- 3); prostitución forzada (artículo 46 LOSDMVLV);*
- 4) esclavitud sexual (artículo 47 LOSDMVLV);*
- 5) tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes (artículo 55 LOSDMVLV);*
- 6) trata de mujeres, niñas y adolescentes (artículo 56 LOSDMVLV);*
- 7) explotación sexual de niños y adolescentes varones, cometido en forma continuada (artículo 258 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes); y*
- 8) abuso sexual a niños y adolescentes, cometidos en continuada (artículos 259 y 260 eiusdem), una vez desvirtuado el principio de presunción de inocencia, mediante sentencia condenatoria definitivamente firme, no podrán otorgarse los beneficios procesales establecidos en la ley ni habrá lugar a la aplicación de fórmulas alternativas de cumplimiento de pena.*

b.- que cuando la víctima agredida de los delitos señalados en el dispositivo anterior, sea niño, niña y adolescente de menor edad, empezará a computarse el lapso de prescripción de la acción penal desde el día en que la víctima cumpla su mayoría de edad. De igual manera, dicho lapso de prescripción comenzará a computarse desde el día que fallezca la víctima menor de edad".

En atención a todo lo expuesto esta Sala, ha podido ir concluyendo que los asuntos que se refieren a delitos sexuales cometidos contra las mujeres, adolescentes y niñas indígenas deben analizarse y estudiarse teniendo en cuenta la naturaleza multifacética de su identidad; aunado a ello se debe, a los fines de abordar y prevenir la discriminación contra las mujeres, adolescentes y las niñas indígenas, integrar una perspectiva de género, referida además a ellas como indígenas, tomando en cuenta aspectos interculturales y multidisciplinarios que se enfrentan a lo largo de toda su vida, por su condición de ser indígenas. Así se establece.

En consecuencia, esta Sala Constitucional en el caso de marras, instituye que tiene que garantizarle a la niña indígena, cuya identidad es omitida, de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, víctima del delito de delito de abuso sexual con penetración, que:

- a) Sea protegida en su condición de niña, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
- b) Sea protegida en su condición de niña, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
- c) Sea protegida en su condición de niña, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
- d) Sea protegida en su condición de indígena, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Así se declara.

De modo que los catálogos de derechos humanos que, reconocen su naturaleza interseccional e intercultural se sumen en su garantía y no en el detrimento de los derechos fundamentales debidamente reconocidos por el Estado venezolano a nuestros indígenas, debiendo entonces ambos concurrir.

Tal como lo ha señalado la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) en el libro "Principios sobre los sistemas de justicia indígenas y otros consuetudinarios o tradicionales, los derechos humanos y el estado de derecho" © Copyright de la Comisión Internacional de Juristas, Marzo 2021, página 35:

"Los sistemas oficiales de justicia del Estado y los sistemas de justicia indígenas y otros tradicionales o consuetudinarios, deben procurar una mayor coordinación entre sí a fin de garantizar la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho. Las características de dicha coordinación deben adaptarse cuidadosamente al particular contexto social, cultural e institucional".

De manera general, suele entenderse que las autoridades legítimas son los poderes tradicionales que recaen en algunos miembros de una comunidad indígena de acuerdo con la estructura propia de la respectiva cultura, ejerciendo poder de organización, gobierno, justicia, gestión o control social de acuerdo a los usos y las costumbres de cada comunidad.

Así las cosas, es evidente que en el presente caso están reunidos los extremos constitucionales para que se dé la excepción fundamental prevista al ejercicio de la jurisdicción indígena y es que tal como en el presente caso, encontramos que la jurisdicción indígena se utilizó en contravención a cláusulas constitucionales como la que consagra el interés superior del niño, de la niña y del adolescente; el derecho a la integridad física, mental y sexual de toda persona; el derecho a la justicia en caso de ser víctima de algún delito. Así se declara.

Es precisamente esta la situación que ha ocupado a esta Sala Constitucional en tanto, como puede evidenciarse en los folios 10 al 55, de la Pieza I del expediente de esta causa, la decisión a la cual llegó el grupo de ciudadanos que se auto denominan Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad "Huottöja Ahuiyáru Tuho'cho Reje

"Las Pavas" Itasode Jueipocattö Tãbotö Roechuome Ähuiyáru Tuho'cho Reje", decidiendo entre otros aspectos que:

"... Séptimo: Este Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad Huottöja Ahuiyáru Tuho'cho Reje "Las Pavas" por todos estos motivos de hecho y de derecho ABSUELVE al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, del delito de VIOLACIÓN, tipificado en el artículo 374 del Código Penal en contra de (...), por lo que remite la presente sentencia al tribunal de la jurisdicción especial ordinaria (sic) que este (sic) conociendo de la presente causa, para bajo el principio de colaboración entre los órganos jurisdiccionales (jurisdicción especial indígena y jurisdicción ordinaria) ordene la remisión de la respectiva BOLETA DE EXCARCELACIÓN al ciudadano HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO, titular de la cédula de identidad N° V- 13.058.323, por haber sido ABSUELTO en la presente causa..."

Es justamente este blanqueamiento de los delitos sexuales en la jurisdicción indígena, amparados en los supuestos de hecho que ese tipo de abuso sexual a niñas y adolescentes indígenas, no pueden ser tenidos como un delito sexual en tanto culturalmente ello no es así para ellos, sobre ese alegato cultural en el que subyace la impunidad, se hace necesario que el Estado combata dicha posición, en aras de garantizarles a todas las mujeres incluidas niñas y adolescentes una protección plena de todos sus derechos, incluidos los sexuales, recordando que el legislador, en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estableció que las transgresiones de naturaleza sexual constituyen "un atentado aberrante contra la dignidad, integridad física y libertad sexual de la mujer".

De este modo, se evidencia que en el presente caso no estuvimos ante un ejercicio de justicia indígena en los términos precisados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ni en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas y tampoco esa justicia aplicada estuvo ceñida a los extremos que la misma tiene según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Así se declara.

Al respecto esta Sala, con la Sentencia N.º 1325, del 4 de agosto de 2011 (Caso: "Carlos Eduardo Ramos Vargas") estableció con carácter vinculante, la competencia de los juzgados especializados en materia de violencia de género para el juzgamiento de los delitos previstos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, con independencia de que el sujeto activo sea un ciudadano indígena, ya que las autoridades legítimas de los pueblos y comunidades indígenas solo pueden actuar en materia de violencia de género como órganos receptores de denuncia, al efecto señaló que:

"... Con atención a ello, si bien es cierto que la Jurisdicción Especial Indígena existe y es reconocida por el ordenamiento jurídico patrio, siendo de aplicación preferente en ciertos casos, no es menos cierto que tal aplicación está delimitada igualmente, tanto por los Convenios Internacionales como por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes especiales.

A este tenor, el artículo 8, numeral 2 del señalado Convenio OIT N.º 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes dispone: del 27 de junio de 1989:

"Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio."

En este sentido, el ya citado artículo 9 numeral 1º del Convenio OIT N.º 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y el artículo 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya citados supra, establecen que se podrá aplicar la usanza, práctica o costumbre indígena tradicional para la resolución de conflictos o delitos, siempre que esta no transgreda o en modo alguno colide con el ordenamiento jurídico nacional u orden público.

...omissis...

Ello se reafirma del párrafo único del artículo 71 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuando establece: "Los pueblos indígenas constituirán órganos receptores de denuncia, integrado por las autoridades legítimas de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, sin perjuicio que la mujer agredida pueda acudir a otros órganos indicados en el presente artículo."

...omissis...

Así entonces, el propósito del legislador con esta disposición es que las autoridades legítimas de los pueblos indígenas sean solo órganos receptores de denuncia, siempre y cuando la mujer indígena víctima así lo estime, pero la Ley Especial no le da facultad jurisdiccional, por lo que lo que en materia de delitos de violencia de género la jurisdicción especial indígena está limitada por las disposiciones previstas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que está en consonancia con el artículo 9, numeral primero del Convenio OIT N.º 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, supra citados, según los cuales se podrá aplicar la usanza indígena tradicional para la resolución de conflictos o delitos, siempre que esta no transgreda o en modo alguno colide con el ordenamiento jurídico nacional u orden público.

Con base en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, esta Sala —con carácter vinculante— reafirma la competencia de la jurisdicción especial en materia de género para el juzgamiento de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con independencia de que el sujeto activo sea un ciudadano indígena y en consecuencia los delitos catalogados como de violencia de género, deben ser investigados incluso de oficio por los tribunales especializados con competencia en violencia de género. Así se decide..."

La Sala desde entonces estableció que si bien es cierto que la jurisdicción especial indígena es reconocida por el ordenamiento jurídico patrio, su aplicación está delimitada tanto por los convenios internacionales como por la Constitución de la República, razón por la cual, se consideró que la tutela del bien jurídico referente a la dignidad de la mujer es de especial resguardo y protección del Estado venezolano, con independencia de las características étnicas de los sujetos activos involucrados en la perpetración de ese tipo de delitos, de allí que se reafirmó que el monopolio para el juzgamiento de los delitos de género, lo tienen los tribunales de violencia contra la mujer, sin distinción de que el sujeto activo del delito sea un ciudadano indígena.

En el presente caso, puede observarse que tomando en cuenta la referida sentencia de esta Sala, la competencia y capacidad de juzgamiento del ciudadano **HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N.º V-13.058.323, obrero, indígena y miembro de la comunidad "Las Pavas", ubicada en el Municipio Atures del Estado Amazonas, por la presunta comisión del delito de abuso sexual con penetración a niña, previsto y sancionado en el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, efectuado en contra de una niña indígena, cuya identidad es omitida, de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, le corresponde a los juzgados especializados con competencia para juzgar los delitos de Violencia contra la Mujer. Así se declara.

De modo que, al haber sido juzgado el ciudadano **HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO**, dentro de la jurisdicción indígena, haciéndolo un grupo que se denominan *Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad Huottója Ahuiyáru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jueipocattó Täbotó Roechuome Ahuiyáru Tuhuo'cho Reje*, conformado por los ciudadanos José Manuel Ochoa, titular de la cédula de identidad N.º V-8.444.344, identificado como Autoridad Legítima; José Manuel García, titular de la cédula de identidad N.º V-8.901.112, identificado como Autoridad Legítima; José Gregorio Muñoz, titular de la cédula de identidad N.º V-8.903.423, identificado como Autoridad Legítima; Juan Martínez, titular de la cédula de identidad N.º V-15.499.867, identificado como Capitán; Antonio Rogelio Palacio, titular de la cédula de identidad N.º V-10.605.226, identificado como Cacique; Enrique Martínez Gómez, titular de la cédula de identidad N.º V-18.835.950, identificado como Secretario y Rogelio Ochoa Soto, titular de la cédula N.º V-12.629.899, actuando como Intérprete, quienes dictaron el 1º de mayo de 2017, una sentencia mediante la cual se absolvió al ciudadano **HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO**, por la presunta comisión del delito de abuso sexual a niña con penetración, agravado y continuado, según lo previsto en el artículo 259 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente con la agravante establecida en el artículo 217 ejusdem, en perjuicio de la niña (identidad omitida), sin que mediara ninguna representación en defensa de los derechos de esa niña indígena durante el desarrollo de ese juicio; debe esta Sala considerar que lo ajustado a derecho es **ANULAR** la decisión dictada, en resguardo de los derechos inherentes a esa niña indígena. Así se decide.

En consecuencia, esta Sala debe declarar como **IMPROCEDENTE** la presente acción innominada de naturaleza constitucional, y en consecuencia se establece que la causa penal identificada con el alfanumérico XP01-P-2017-000273, que cursa ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del

Estado Amazonas, que se le sigue al ciudadano **HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO**, por la presunta comisión del delito de abuso sexual con penetración a niña, previsto y sancionado en el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, efectuado en contra de una niña indígena, cuya identidad es omitida, de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, deberá seguirse conociendo por dicho Juzgado, ordenándose la realización del juicio oral y público hasta su total culminación, ello en virtud de que en la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, aun no existe en funcionamiento un Tribunal de Violencia contra la Mujer en Función de Juicio. Así se decide.

Declarado lo anterior, esta Sala, visto que en el presente fallo se realizó un análisis interpretativo de la coexistencia del derecho originario indígena con el ordenamiento jurídico estatal, esta sentencia debe tener carácter vinculante, ya que se decidió en referencia a los delitos sexuales determinados como delitos atroces por esta Sala Constitucional, en los cuales las víctimas de los mismos sean niñas o adolescentes indígenas, o en las causas donde concurren niños o adolescentes indígenas víctimas de ambos sexos, los mismos deberán ser juzgados de conformidad con lo determinado por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como por la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ante la jurisdicción ordinaria especial de esa materia y no ante la jurisdicción indígena, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se deberá ordenar su publicación íntegra en la Gaceta Judicial de este Alto Tribunal, en la página web del mismo y en la Gaceta Oficial de la República con la siguiente mención en su sumario:

"Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que, con carácter vinculante, establece la competencia de la jurisdicción especial en materia de género para el juzgamiento de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuando la comisión de los mismos sea contra niñas y adolescentes indígenas, o en las causas donde concurren niños o adolescentes indígenas víctimas de ambos sexos, los cuales además deben ser juzgados de conformidad con lo determinado por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, desaplicando para el juzgamiento de esos delitos la jurisdicción indígena".

IV

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO: Se **DECLARA** como **IMPROCEDENTE** la presente acción innominada de naturaleza constitucional, y en consecuencia se **DECLARA LA NULIDAD**

de la decisión dictada el 1º de mayo de 2017, por un grupo que se denominan *Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad Huottója Ahuiyáru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jueipocattó Täbotó Roechuome Ahuiyáru Tuhuo'cho Reje*, conformado por los ciudadanos José Manuel Ochoa, titular de la cédula de identidad N.º V-8.444.344, identificado como Autoridad Legítima; José Manuel García, titular de la cédula de identidad N.º V-8.901.112, identificado como Autoridad Legítima; José Gregorio Muñoz, titular de la cédula de identidad N.º V-8.903.423, identificado como Autoridad Legítima; Juan Martínez, titular de la cédula de identidad N.º V-15.499.867, identificado como Capitán; Antonio Rogelio Palacio, titular de la cédula de identidad N.º V-10.605.226, identificado como Cacique; Enrique Martínez Gómez, titular de la cédula de identidad N.º V-18.835.950, identificado como Secretario y Rogelio Ochoa Soto, titular de la cédula N.º V-12.629.899, actuando como Intérprete, sentencia mediante la cual se absolvió al ciudadano **HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO**, ya identificado, por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual a Niña con penetración, agravado y continuado, según lo previsto en el artículo 259 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente con la agravante establecida en el artículo 217 ejusdem, en perjuicio de la niña (identidad omitida), sin que mediara ninguna representación en defensa de los derechos de esa niña indígena durante el desarrollo de ese juicio.

SEGUNDO: Se **ORDENA** al Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas continuar con el juzgamiento del ciudadano **HÉCTOR JOSÉ SOLANO SOLANO**, ya identificado, por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual a Niña con penetración, agravado y continuado, según lo previsto en el artículo 259 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente con la agravante establecida en el artículo 217 ejusdem, en perjuicio de la niña (identidad omitida), de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ello en virtud de que en la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, aun no existe en funcionamiento un Tribunal de Violencia contra la Mujer en Función de Juicio.

TERCERO: Se **ORDENA** notificar y remitir copia certificada de la presente decisión al grupo de ciudadanos que se denominan Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena de la Comunidad "Huottója Ahuiyáru Tuhuo'cho Reje "Las Pavas" Itasode Jueipocattó Täbotó Roechuome Ahuiyáru Tuhuo'cho Reje", que interpusieron el "conflicto de jurisdicción".

CUARTO: Se **ORDENA** notificar y remitir copia certificada de la presente decisión al Juez Rector de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, al Juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, al Juez Coordinador del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, al Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, con sede en Puerto Ayacucho, a la Defensoría del Pueblo, a la Defensa Pública, a la Fiscalía General de la República y al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

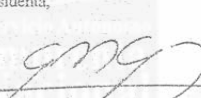
QUINTO: Se **ORDENA** la publicación íntegra del presente fallo en la Gaceta Judicial de este Alto Tribunal, en la página web del mismo y en la Gaceta Oficial de la República con la siguiente mención en su sumario:

"Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que, con carácter vinculante, establece la competencia de la jurisdicción especial en materia de género para el juzgamiento de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuando la comisión de los mismos sea contra niñas y adolescentes indígenas, o en las causas donde concurren niños o adolescentes indígenas víctimas de ambos sexos, los cuales además deben ser juzgados de conformidad con lo determinado por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, desaplicando para el juzgamiento de esos delitos la jurisdicción indígena".


Publíquese y regístrese. Notifíquese conforme a lo establecido en el artículo 913 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 21 días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023). Años: 213º de la Independencia y 164º de la Federación.

La Presidenta,

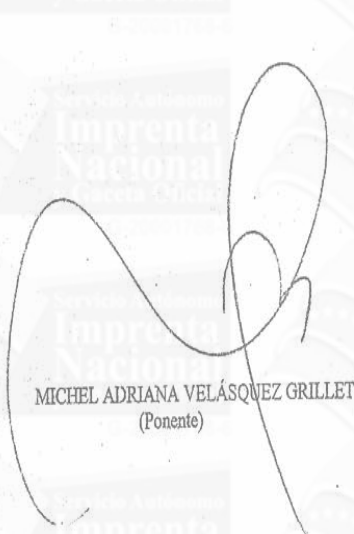

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

La Vicepresidenta,


LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

Los Magistrados,

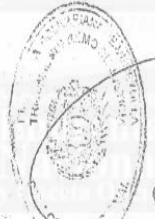

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS



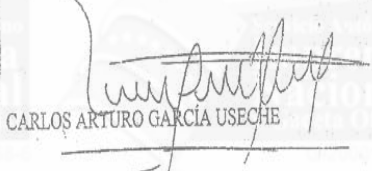
MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET
(Ponente)



TANIA D'AMELIO CARDIET



El Secretario,



CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE

17-1100
MAVG.

Quien suscribe, en mi carácter de Secretario de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, certifica que: hecha la confrontación de estas copias con sus originales, se encuentra que es fiel y exacta, de lo cual doy fe.

En Caracas, a los 19 días del mes de enero de 2024



El Secretario,



Carlos Arturo García Useche

AA50-T-2017-001100

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO PÚBLICO

Despacho del Fiscal General de la República

Caracas, 02 de noviembre de 2023

Años 213° y 164°

"ORDEN AL MÉRITO GENERAL EN JEFE JACINTO PÉREZ ARCAÏ"

ACUERDO N° 01

En uso de la atribución que me confiere el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución N° 538 de fecha 27 de marzo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.611 de fecha 18-04-2023, se creó la Condecoración "**ORDEN AL MÉRITO GENERAL EN JEFE JACINTO PÉREZ ARCAÏ**", para distinguir al personal del Ministerio Público de Venezuela, personalidades, instituciones, y organismos nacionales e internacionales, que se destaquen en sus cargos o actividades por aportes significativos en el campo de la historia, la cultura y la defensa integral de la nación, y que contribuyan con sus valores de identidad y amor a la Patria;

CONSIDERANDO:

Que, el General en Jefe Jacinto Pérez Arcay, es considerado un bastión de la Revolución por su constante aporte a la ideología Bolivariana del Siglo XXI, propugnando siempre los valores y el amor al ideario del Libertador Simón Bolívar y la Patria.


CONSIDERANDO:

Que, en reunión efectuada el día 01 de septiembre de 2023, los integrantes del Consejo de las Ordenes, aprobaron por unanimidad la concesión de la distinción "**ORDEN AL MÉRITO GENERAL EN JEFE JACINTO PÉREZ ARCAÏ**", en su Única Clase, al ciudadano Abogado **MAINEL ALEJANDRO OCANDO ROJAS**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía 34 Nacional Plena.

SE ACUERDA:

ÚNICO: Imponer la condecoración de la "**Orden Mérito General en Jefe Jacinto Pérez Arcay**", en su Única Clase y hacerle entrega del diploma correspondiente, al ciudadano Abogado **MAINEL ALEJANDRO OCANDO ROJAS**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía 34 Nacional Plena.

Comuníquese y Publíquese.



TAREK WILLIANS SAAB
Fiscal General de la República
Presidente de la Orden




URIMARÉ GUÉDEZ COPELAND
Directora de Secretaría General (E)
Canciller de la Orden

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO PÚBLICO

Despacho del Fiscal General de la República

Caracas, 02 de noviembre de 2023

Años 213° y 164°

"ORDEN AL MÉRITO FÉLIX MERCÁDEZ VARGAS"**ACUERDO N° 07**

TAREK WILLIANS SAAB, Fiscal General de la República, en uso de la atribución que me confiere el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución N° 1079 de fecha 05 de octubre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.787 de fecha 10-10-2007, se creó la Condecoración **"ORDEN AL MÉRITO FÉLIX MERCÁDEZ VARGAS"**, para distinguir al personal del Ministerio Público que en ejercicio de sus funciones se destaque por su lealtad a la legalidad, nobleza a la justicia, dedicación al trabajo, responsabilidad, espíritu de sacrificio, desarrollo profesional, honestidad, compañerismo y compromiso institucional;

CONSIDERANDO:

Que, en reunión efectuada el día 01 de septiembre de 2022, los integrantes del Consejo de las Ordenes, aprobaron por unanimidad la concesión de la distinción **"ORDEN AL MÉRITO FÉLIX MERCÁDEZ VARGAS"**, en su Única Clase, a los ciudadanos:

Abogada **JEIMY YESENIA DUQUE**, Fiscal Provisorio Nacional con Competencia en Materia de Cooperación Penal Internacional, adscrita a la Dirección de Asuntos Internacionales.

Licenciado **RICHARD ERICK PATACCHIOLA RODRÍGUEZ**, Jefe del Departamento de Archivo Central, adscrito a la Dirección de Secretaría General.

Abogada **ROMAIRY KATIUSKA GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ**, Fiscal Auxiliar Coordinador en la Sala Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas.

Abogada **RAIZA ELIGIA SÁNCHEZ DÁVILA**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía Quinta del Ministerio de la Circunscripción Judicial del estado La Guaira.

Abogada **MARÍA ALEJANDRA FERNÁNDEZ DE BENTO**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía Sexta del Ministerio del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa.

Abogada **ROSMERY DEL VALLE RENGIFO KEY**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía Sexta del Ministerio del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre.

Licenciado **JORGE RAMÓN MEDINA**, Sub Director en la Dirección de Planificación.

Ciudadano **SIMÓN GILBERTO FERNÁNDEZ MÁRQUEZ**, Director de Gestión Administrativa, adscrito a la Fundación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público.

Abogado **LUIS ERISÓN MARCANO LÓPEZ**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía Sexta del Ministerio Público para actuar en la Sala Plena y las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Abogado **FARIK KARIN MORA SALCEDO**, Fiscal Titular 67 Nacional Plena y Especial en Extinción de Dominio.

Abogado **EDDY ALBERTO RODRÍGUEZ BENCOMO**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía 50 Nacional con competencia Plena y Especial Extinción de Dominio.

Abogado **CÉSAR ENRIQUE ÁLVAREZ NAVA**, Abogado Adjunto V, en la Dirección General de Protección de los Derechos Humanos.

Abogada **ELIANNY DEL VALLE OROZCO FERRAS**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía 20 Nacional Plena.

Abogado **VLADIMIR ENRIQUE ÁNGEL AGUILERA**, Fiscal Titular en la Fiscalía 38 Nacional Plena.

Ciudadana **MAGDA YARAY LIRA GEDLER**, Secretaria II, en la Dirección General de Protección de la Familia y la Mujer.

Ciudadana **WISTNEY ALEXANDRA GALINDEZ ROMERO**, Abogado Adjunto V, en la Dirección General de Protección de la Familia y la Mujer.

SE ACUERDA:

ÚNICO: Imponer la Medalla de la **"Orden al Mérito Félix Mercádez Vargas"**, en su Única Clase y hacerle entrega del diploma correspondiente, a los ciudadanos:

Abogada **JEIMY YESENIA DUQUE**, Fiscal Provisorio Nacional con Competencia en Materia de Cooperación Penal Internacional, adscrita a la Dirección de Asuntos Internacionales.

Licenciado **RICHARD ERICK PATACCHIOLA RODRÍGUEZ**, Jefe del Departamento de Archivo Central, adscrito a la Dirección de Secretaría General.

Abogada **ROMAIRY KATIUSKA GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ**, Fiscal Auxiliar Coordinador en la Sala Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas.

Abogada **RAIZA ELIGIA SÁNCHEZ DÁVILA**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía Quinta del Ministerio de la Circunscripción Judicial del estado La Guaira.

Abogada **MARÍA ALEJANDRA FERNÁNDEZ DE BENTO**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía Sexta del Ministerio del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa.

Abogada **ROSMERY DEL VALLE RENGIFO KEY**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía Sexta del Ministerio del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre.

Licenciado **JORGE RAMÓN MEDINA**, Sub Director en la Dirección de Planificación.

Ciudadano **SIMÓN GILBERTO FERNÁNDEZ MÁRQUEZ**, Director de Gestión Administrativa, adscrito a la Fundación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público.

Abogado **LUIS ERISÓN MARCANO LÓPEZ**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía Sexta del Ministerio Público para actuar en la Sala Plena y las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Abogado **FARIK KARIN MORA SALCEDO**, Fiscal Titular 67 Nacional Plena y Especial en Extinción de Dominio.

Abogado **EDDY ALBERTO RODRÍGUEZ BENCOMO**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía 50 Nacional con competencia Plena y Especial Extinción de Dominio.

Abogado **CÉSAR ENRIQUE ÁLVAREZ NAVAS**, Abogado Adjunto V, en la Dirección General de Protección de los Derechos Humanos.

Abogada **ELIANNY DEL VALLE OROZCO FERRAS**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía 20 Nacional Plena.

Abogado **VLADIMIR ENRIQUE ÁNGEL AGUILERA**, Fiscal Titular en la Fiscalía 38 Nacional Plena.

Ciudadana **MAGDA YARAY LIRA GEDLER**, Secretaria II, en la Dirección General de Protección de la Familia y la Mujer.

Ciudadana **WISTNEY ALEXANDRA GALINDEZ ROMERO**, Abogado Adjunto V, en la Dirección General de Protección de la Familia y la Mujer.

Comuníquese y Publíquese.



TAREK WILLIANS SAAB
Fiscal General de la República
Presidente de la Orden

URIMARE GUÉDEZ COPELAND
Directora de Secretaría General (E)
Canciller de la Orden

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO PÚBLICO
 Despacho del Fiscal General de la República
 Caracas, 01 de noviembre de 2023
 Años 213° y 164°

"ORDEN AL MÉRITO DR. BORIS BOSSIO BARCELÓ"

ACUERDO N° 10

TAREK WILLIANS SAAB, Fiscal General de la República, procediendo de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en el artículo 25 numeral 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución N° 909 de fecha 02 de julio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 39.961 de fecha 10-07-2012, se creó la Condecoración "**ORDEN AL MÉRITO DR. BORIS BOSSIO BARCELÓ**", para distinguir a los Fiscales, Investigadores, Expertos Criminalistas y Forenses del Ministerio Público de Venezuela y países amigos, que con su labor intelectual o ejercicio profesional, valentía, integridad y perseverancia en la lucha contra la impunidad, hayan realizado una función meritoria y determinante en el esclarecimiento de casos extremadamente complejos;

CONSIDERANDO:

Que la entrega profesional, la correcta aplicación de los conocimientos jurídicos en el desempeño de sus labores y la vocación de servicio, puestos en manifiesto para el desmantelamiento de Organizaciones Criminales hacia el estado Venezolano.

CONSIDERANDO:

Que en reunión efectuada el día 01 de septiembre de 2023, los integrantes del Consejo de las Ordenes, aprobaron por unanimidad la concesión de la distinción "**ORDEN AL MÉRITO DR. BORIS BOSSIO BARCELÓ**" en su Única Clase, a los ciudadanos que se mencionan a continuación:

Abogada **ELIANA NOHEMY DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, quien dirigió la investigación "**Caso Mejías**".

Abogado **JAVIER IGNACIO QUINTERO GÓMEZ**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía 3 Nacional Contra Las Drogas, quien dirigió la investigación relacionada con la Red de Narcotráfico y Legitimación de Capitales con base en el estado Falcón, "**Caso Camacaro Thompson**".

Abogado **ADRIÁN FERNANDO GARATE DÍAZ**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía 68 Nacional en materia Contra Las Drogas, quien dirigió la investigación relacionada con el "**caso Operación Sombra**".

Abogado **JONATHAN ELIECER CARRERO ARRAIZ**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía 83 Nacional Contra La Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, quien dirigió la investigación "**Operación Constitución**".

ACUERDO:

ÚNICO: Otorgar la "**Orden al Mérito Dr. Boris Bossio Barceló**", en su Única Clase, a los ciudadanos que se mencionan a continuación:

Abogada **ELIANA NOHEMY DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Monagas.

Abogado **JAVIER IGNACIO QUINTERO GÓMEZ**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía 3 Nacional Contra Las Drogas.

Abogado **ADRIÁN FERNANDO GARATE DÍAZ**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía 68 Nacional en materia Contra Las Drogas.

Abogado **JONATHAN ELIECER CARRERO ARRAIZ**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía 83 Nacional Contra La Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos.

Comuníquese y Publíquese.



TAREK WILLIANS SAAB
 Fiscal General de la República
 Presidente de la Orden

URIMARE GUÉDEZ COPELAND
 Directora de Secretaría General (E)
 Canciller de la Orden

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO PÚBLICO
 Despacho del Fiscal General de la República
 Caracas, 02 de noviembre de 2023
 Años 213° y 164°

ORDEN AL MÉRITO DEL MINISTERIO PÚBLICO

ACUERDO N° 67

TAREK WILLIANS SAAB
 Fiscal General de la República

En uso de la atribución que me confiere el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución N° 234 de fecha 06 de octubre de 1986, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 33.575 de fecha 13 de octubre de 1986, se creó la "**ORDEN AL MÉRITO DEL MINISTERIO PÚBLICO**", con la finalidad de distinguir a funcionarios, empleados y obreros de la Institución que se hayan destacado en alguna actividad destinada a exaltar los valores y principios que orientan al Ministerio Público, en su aspecto educativo, jurídico, moral, cultural, social y profesional. La "**Orden al Mérito del Ministerio Público**", también podrá ser otorgada a personalidades nacionales o extranjeras, que con su aporte hayan contribuido al beneficio de la Institución.

CONSIDERANDO:

Que, en reunión efectuada el día 01 de septiembre de 2023, los integrantes del Consejo de las Ordenes, aprobaron por unanimidad la concesión de la distinción "**ORDEN AL MÉRITO DEL MINISTERIO PÚBLICO**", en su Primera Clase, Segunda Clase y Tercera Clase, a funcionarios de este Organismo.

SE ACUERDA:

PRIMERO: Imponer la Condecoración de la "**Orden al Mérito del Ministerio Público**", en su **Primera Clase** y hacerle entrega del diploma correspondiente, al ciudadano:

Licenciado **FREDDY RAMÍREZ MONCADA**, Subdirector en la Dirección de Presupuesto, adscrita a la Dirección General Administrativa.

Ciudadano **ASSA FARES NAKKOUR HALABI**, Concejal del estado Anzoátegui.

SEGUNDO: Imponer la Medalla de la "**Orden al Mérito del Ministerio Público**", en su **Segunda Clase** y hacerle entrega del diploma correspondiente, al ciudadano:

Ingeniero **CHARLES WILLIAN BERROTERÁN MEJÍA**, Coordinador de Plataforma en la Dirección de Tecnología.

TERCERO: Imponer la Medalla de la "**Orden al Mérito del Ministerio Público**", en su **Tercera Clase** y hacerle entrega del diploma correspondiente, a los ciudadanos:

Ciudadana **EVELYN MAIVE TERÁN BRACHO**, Asistente al Fiscal General III en el Despacho del Fiscal General de la República.

Comunicador **HENRY JOSÉ DELGADO**, Analista de Entorno en la Dirección de Relaciones Institucionales.

Abogada **PATRICIA ANTONIETA PAREDES CABRILES**, Subdirectora en la Dirección de Fiscalías Superiores.

Técnico Superior Universitario **VICSELLYS OHENIA MARCANO NIÑO**, Coordinadora (E) en la Dirección de Recursos Humanos.

Ciudadana **LEIDY JOSEFINA JAIMEZ**, Secretario Ejecutivo Jefe en la Dirección de Inspección y Disciplina.

Licenciada **INGRID MAGDALENA CÓRDOBA DÍAZ**, Especialista en la Dirección de Seguridad Integral.

Abogada **LISBETH DEL VALLE RUIZ SÁNCHEZ**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas.

Abogada **ENIRDA JOSEFINA SEPULVEDA GONZÁLEZ**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía Novena del Ministerio Público del primer circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar.

Abogado **GUILLERMO JESÚS AMAYA MEDINA**, Fiscal Provisorio en la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Falcón.

Abogada **MAIGELINA LORENZA SARMIENTO MORALES**, Especialista en la Dirección de Gestión Social.

Licenciada **GLENDIA ANTONIETA PEREIRA**, Jefe de División de la Unidad Administradora Desconcentrada del estado Cojedes.

Técnico Superior Universitario **JAISY ELOISA GUEVARA GONZALEZ**, Especialista en la Dirección General Contra la Corrupción.

Comuníquese y Publíquese.



TAREK WILLIANS SAAB
 Fiscal General de la República
 Presidente de la Orden

URIMARE GUÉDEZ COPELAND
 Directora de Secretaría General (E)
 Canciller de la Orden

**CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

213° y 164°

Caracas, 05 de febrero de 2024

RESOLUCIÓN**N° 01-00-000020****JHOSNEL PERAZA MACHADO**
Sub-Contralor (E) General de la República

Vista la falta absoluta del ciudadano ELVIS AMOROSO, por su designación como rector principal del Consejo Nacional Electoral, el 24 de agosto de 2023, el Sub-Contralor (E) **JHOSNEL PERAZA MACHADO**, titular de la cédula de identidad No. V-12.187.080, designado mediante Resolución N° 01-00-000132 del 08 de abril de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.700 del 22 de agosto de 2019, en cumplimiento de los efectos del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 289 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; los artículos 10 y 14 numerales 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con lo previsto en el artículo 5 numerales 13 y 14 de la Resolución Organizativa N° 1, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.324 del 22 de febrero de 2022.

RESUELVE

PRIMERO: Designar al ciudadano **JORGE LUIS VILLEGAS FERNÁNDEZ**, titular de la cédula de identidad N° **V-9.817.453**, como DIRECTOR, en calidad de encargado, de la Dirección de Determinación de Responsabilidades, adscrita a la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Máximo Órgano de Control Fiscal, a partir de su notificación.

SEGUNDO: En consecuencia, queda autorizado para ejercer las atribuciones que a la indicada Dirección y a su titular le asignen el Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, así como la Resolución N° 01-00-000127 de fecha 14 de febrero de 2017, publicados en las Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela N°s 39.840 y 41.098 de fechas 11 de enero de 2012 y 17 de febrero de 2017, respectivamente y demás instrumentos normativos aplicables.

TERCERO: Delegar en el ciudadano **JORGE LUIS VILLEGAS FERNÁNDEZ**, antes identificado, la atribución prevista en el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, para dictar las decisiones a que se refiere el artículo 103 *eiusdem* y para imponer las multas consagradas en los artículos 94 y 105 del mismo texto legal, en el ámbito de sus respectivas competencias.

CUARTO: Delegar en el ciudadano **JORGE LUIS VILLEGAS FERNÁNDEZ**, antes identificado, la facultad para certificar las copias de los documentos físicos que no sean de carácter reservado, que reposan en los archivos de la Dirección de Determinación de Responsabilidades, adscrita a la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Máximo Órgano de Control Fiscal.

QUINTO: El Sub-Contralor (E) General de la República, tomará juramento al ciudadano **JORGE LUIS VILLEGAS FERNÁNDEZ**, titular de la cédula de identidad N° **V-9.817.453**, designado mediante la presente Resolución.

Dada, firmada y sellada en Caracas, a los cinco (05) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024). Años 213° de la Independencia y 164° de la Federación.

Comuníquese, notifíquese y publíquese,



JHOSNEL PERAZA MACHADO
Sub-Contralor (E) General de la República



**A DILE NO
LOS GESTORES**



Requisitos para solicitar Gaceta Certificada de Naturalización

- ✓ El trámite es **PERSONAL**.
- ✓ En caso de no acudir la persona, un familiar deberá consignar autorización con parentesco hasta 3er grado de consanguinidad (Padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tíos o sobrinos).
- ✓ En su defecto consignar poder debidamente autenticado.



Síguenos en Twitter
[@oficialgaceta](#)
[@oficialimprensa](#)

Servicio Autónomo
Imprenta
Nacional
y Gaceta Oficial

GACETA OFICIAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1

AÑO CLI - MES V

Número 42.824

Caracas, jueves 22 de febrero de 2024

*Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria
Caracas – Venezuela*

Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003
en la Gaceta Oficial N° 37.818

<http://www.minci.gob.ve>

Esta Gaceta contiene 24 páginas, costo equivalente
a 10,05 % valor Unidad Tributaria

<http://www.imprentanacional.gob.ve>

LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES

(Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.688 de fecha viernes 25 de febrero de 2022)

Objeto

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del Estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del Pueblo al contenido de los mismos, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

Artículo 4. La "Gaceta Oficial", creada por Decreto Ejecutivo de 11 de octubre de 1872, continuará con la denominación "Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela".

Efectos de la publicación

Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela le otorga carácter público y con fuerza de documento público.

Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones oficiales surtan efectos deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el Reglamento que rige la materia.

Publicación física y digital

Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela acoge el sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta Ley, incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda.

La Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo establecerá las normas y directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el sistema informático de las publicaciones digitales.

Publicaciones oficiales

Artículo 15. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial podrá dar carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones.

Así mismo, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial dictará un acto en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier otro servicio asociados a sus funciones.